

“No a la contaMINación”. Contrainsurgencia en el proyecto minero de cobre Tía María (Perú)*

“No a la contaMINación”. Counter-insurgency in the Tía María copper mining project (Peru)

Alexander DUNLAP

University of Oslo, Noruega

a.a.dunlap@sum.uio.no

Carlo Eduardo FERNÁNDEZ VALENCIA

Investigador Independiente, Perú

carloeduardofernandezvalencia@gmail.com

BIBLID [ISSN 2174-6753, Vol.22(1): a2201]

Artículo ubicado en: encrucijadas.org

Fecha de recepción: 7 de marzo de 2021 || Fecha de aceptación: 30 de abril de 2022

Resumen

Este artículo analiza las reacciones políticas “top-down” de una empresa de Minería (Southern Copper Perú) y el gobierno peruano a la oposición popular frente a un proyecto minero de cobre, situado sobre el valle agrícola de Tambo (Perú). Los residentes organizaron una consulta popular, manifestaciones a gran escala, bloqueos de carreteras y huelgas generales y se enfrentaron a una represión violenta. Se examina la ecología política de la contrainsurgencia, que estudia las técnicas de guerra socio ecológica empleadas para controlar los recursos humanos y naturales, y se relaciona con el discurso de la guerra social. En la primera sección se establecen los fundamentos teóricos para discutir la coerción y el “componente de guerra social” presentes en la extracción de recursos naturales. Esto lleva a una visión general de la relación entre las fuerzas de seguridad peruanas y las industrias de extracción, seguida de una breve cronología del conflicto de Tía María. Las dos secciones siguientes ofrecen un análisis de ecología política de varias técnicas de contrainsurgencia “duras” y “blandas” empleadas por el estado peruano y Southern en un intento de pacificar el malestar y la aceptación social del proyecto. La sección final discute el enfoque de contrainsurgencia empleado por el gobierno, y reconoce cómo los actuales acuerdos institucionales y los imperativos comerciales están diseñados para anular las preocupaciones socio ecológicas populares. Haciendo uso del discurso de la guerra social, el artículo sostiene que el aparato estatal y la política sirven como instrumento de pacificación social y explotación ecológica, a pesar de las preocupaciones ecológicas y climáticas generalizadas.

Palabras clave: Perú, conflicto ambiental, contrainsurgencia, resistencia, minería, responsabilidad social corporativa.

* Una versión previa de los resultados de esta investigación fue publicada en 2019 en la revista *Political Geography* (Dunlap, 2019).

Abstract

The aim of this paper is to analyse the top-down political reactions of a mining company (Southern Copper Peru) and the Peruvian government to popular opposition to a copper mining project in the Tambo agricultural valley (Peru). Residents organised a popular consultation, large-scale demonstrations, road blockades and general strikes and faced violent repression. It examines the political ecology of counterinsurgency, which studies the techniques of socio-ecological warfare employed to control human and natural resources, and relates it to the discourse of social warfare. The first section lays the theoretical groundwork for discussing the coercion and "social warfare component" present in natural resource extraction. This leads to an overview of the relationship between Peruvian security forces and extractive industries, followed by a brief chronology of the Tía María conflict. The next two sections provide a political ecology analysis of various 'hard' and 'soft' counterinsurgency techniques employed by the Peruvian state and Southern in an attempt to pacify unrest and social acceptance of the project. The final section discusses the counterinsurgency approach employed by the government, and recognises how current institutional arrangements and commercial imperatives are designed to override popular socio-ecological concerns. Using the discourse of social warfare, the article argues that the state apparatus and politics serve as an instrument of social pacification and ecological exploitation, despite widespread ecological and climate concerns.

Keywords: Peru, Environmental conflict, Counterinsurgency, Resistance, Mining, Corporate Social Responsibility.

Destacados

- Las técnicas de contrainsurgencia "duras" (directas) y "blandas" (indirectas) empleadas por el estado peruano y Southern pacificaron el malestar social y la aceptación de la ingeniería social del proyecto Tía María.
- Los acuerdos institucionales y los imperativos comerciales están diseñados para anular las preocupaciones socioecológicas populares.
- El aparato estatal y la política sirven como instrumento de pacificación social, pero a la vez para la explotación de los recursos naturales.

Cómo citar

Dunlap, Alexander y Carlos Eduardo Fernández Valencia (2022). "No a la contaMINación". Contrainsurgencia en el proyecto minero de cobre Tía María (Perú). *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 22(1), a2201.

1. Introducción

El 1 de agosto de 2014, el Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM) aprobó la segunda evaluación de impacto ambiental (EIA), que permitió que la mina de cobre Tía María comenzara la explotación minera. Cuando el diálogo falló entre el gobierno peruano y los grupos de la sociedad civil, estos últimos declararon una huelga indefinida el 23 de marzo de 2015. Esta es la segunda vez que cientos de personas comenzaron a protestar para evitar que la mina se instalara en el Valle de Tambo en la provincia de Islay, suroeste de Perú (Figura 1). Las manifestaciones y los bloqueos de carreteras se extendieron por todo el valle. La plaza San Francisco, en la ciudad de Cocachacra, era un punto central de concentración, repleto con bloqueos de carreteras hechos de piedras y palos con personas que agitaban sus banderas de neón verde sobre sus cabezas que decían: "¡agro sí, mina no!". A las dos en punto de la tarde del 28 de marzo del 2015, la policía comenzó a tirar bombas de gas lacrimógeno contra la multitud para dispersar la protesta y romper la barricada: "los policías comienzan a tirar bombas lacrimógenas y las bombas lacrimógenas pue, a uno no dejan respirar y uno tiene que correr", explica Kali¹, quien continúa:

Entonces todos estábamos corriendo, el problema es que yo no llego al otro lado (de la acequia), todos saltan y cruzan la acequia, yo no llego a cruzar, y yo por querer pasar no llego y me caigo al agua, y siento que otra persona también se cae sobre mí, era un policía, entonces el agua nos lleva hacia abajo, será unos 30 metros... Me suelta este policía, yo no sabía nadar... [...] el agua nos estaba llevando, el agua era fuerte, más o menos 2 metros y medio de ancho y de altura ahí... en ese entonces el agua estaba más o menos hasta acá (señala a su pecho), y no podíamos pararnos tampoco, entonces él me soltó y ya se agarró ahí él en ramas... el agua me sigue llevando unos ochenta metros, después de unos ochenta metros hay un remanso de donde sale en compuertas *pa'* otro lado bueno... ahí hay un puente, ahí estaba lleno de policías, y yo tenía que pasar sí o sí por ahí y cuando voy a pasar por el puente...; lógicamente, se tiran como seis, siete policías, no para sacarme fuera, pero ahí me comienzan a dar duro, duro, duro, me estaban ahogando, ya pe, ya estaba mal, y recién me sacan al bordo y uno de ellos dice: "puta casi se pasa el tío", ... y me comienzan a sobar (buscándole cosas), ahí me ven mi pantalón, ...ahí está mi pantalón... lo tenía todavía de recuerdo, donde "voa" tener las piedras, la honda que es... ahí sería que estaríamos como unos cinco minutos, de ahí me levantan en peso, y me llevan con dirección al puesto, he caminado de ahí de ese sitio donde me detuvieron, me pegaron, todo... me estaban llevando y yo no podía ni caminar... Aparece un policía de arriba, el policía que se había tirado conmigo al agua, aparece y ellos le gritan: "mi comandante, hemos chapado a uno" —disculpen la palabra—, él dijo: "ese conchasumare se me ha escapado" así le dijo el comandante al otro policía, "ya se cago"... Se que es el comandante Raúl Genaro Acosta ahora sé que es coronel, y me llevan a la policía, al puesto, ahí es donde en el puesto, yo llego... y después de quince veinte minutos él llega, y con palabras soeces él me dice: "oe' conchatumadre a la pared, arriba las manos Todo policía y "PLA PLA" (hace ruidos y mímicas sobre ese momento el contra la pared y rodeado de policías) y siento que están metiendo la mano a mi bolsillo, a mi bolsillo izquierdo así, entonces yo bajo la mirada, y miro que en su mano tenía piedras y hondas queriéndolas meter a mi bolsillo, entonces (hace mímicas y gestos representando el momento) entonces le boto la mano, le digo: "que pasa comandante? porque me pone eso si yo no... nunca he tenido". "Pónganle háganle el

¹ Entrevista 2, 12-01-2018.

parte, pónganle la honda y las piedras yo voy a firmar" (dijo el comandante). Y eso ha hecho, Raúl Genaro Acosta. Ahora más he estado catorce meses (en prisión), yo he salido el año pasado, el cuatro de noviembre (Entrevista 2, 12-01-2018)²

Esta práctica policial de plantar armas a los manifestantes una vez detenidos fue común durante el conflicto de Tía María. Este conflicto comenzó en 2009, pero Southern Copper Perú, una subsidiaria del Grupo México, ya comenzó a evaluar la reserva mineral situada sobre el valle agrícola de Tambo en 2000. Negoció con funcionarios gubernamentales y funcionarios públicos en 2005 y luego proporcionó tres consultas (audiencias) al valle del Tambo.

Figura 1. Mapa del Valle de Tambo y el proyecto Tía María



Fuente: La República.

En la tercera consulta, en agosto de 2009, es cuando estalló un conflicto abierto. La gente comenzó a amotinarse, arrojando piedras y sillas de plástico a los representantes de Southern Copper Perú (en lo sucesivo, Southern) después de que la compañía anunciara su preferencia por usar el agua subterránea y fluvial, no el agua de mar con una planta de desalinización en la mina (Jaskoski, 2014; Lapa Romero, 2017). Lo que aquí comenzó, se convertiría en un conflicto prolongado que, desde 2011, ha resultado en ocho muertes, siete manifestantes y un oficial de policía, cientos de heridos y el presidente Ollanta Humala declarando un estado de emergencia de sesenta días el 9 de mayo de 2015.

Sobre la base de la literatura acerca de la ecología política y estudios agrarios críticos (Ulloa, [2005] 2013, 2017; Fairhead et al., 2012; Borrás et al., 2012; Sullivan, 2013; Aguilar-Støen, 2016; Cavanagh y Benjaminsen, 2017), este artículo busca explorar las "reacciones políticas desde arriba" (Geenen y Verweijen, 2017: 2) a través de la lente

² Esta larga sentencia de prisión también se relacionó con violar la libertad condicional al no presentarse en la estación de policía todos los lunes.

de la contrainsurgencia. Examinamos las estrategias, tácticas y enfoques empleados por y entre la empresa Southern Copper y el estado peruano para mitigar y reprimir el rechazo popular hacia el proyecto minero de Tía María. Al hacerlo, este artículo contribuye al estudio de la "minería militarizada" (Gedicks, 2015: 146), "la criminalización de la defensa de la tierra" (Middeldorp et al., 2016; Birss, 2017; Rasch, 2017; Dunlap, 2018a, 2017; Brock y Dunlap, 2018; Middeldorp y Le Billon, 2019) y la militarización más allá del campo de batalla en general. Así, se presta atención al llamado de Marta Conde y Philippe Le Billon (2017: 693) para una mayor investigación sobre "la criminalización del disenso por parte del estado y la represión de la resistencia por parte de las compañías mineras", este artículo aborda los conflictos ambientales a través de la contrainsurgencia para diseccionar críticamente las relaciones de fuerza y esfuerzos de la ingeniería social empleados en el pasado y el presente (en varias intensidades) para abrir y mantener sitios de extracción de recursos naturales. Destacando el componente de guerra social dentro del proyecto Tía María, el artículo argumenta que el gobierno peruano y Southern están empleando un enfoque de contrainsurgencia de "todo el gobierno" articulado a través de asociaciones formales e informales público-privadas³ para diseñar mediante la ingeniería social la extracción del subsuelo.

El artículo se basa en una investigación de campo en el Valle de Tambo realizada entre el 28 de diciembre de 2017 y el 22 de febrero de 2018, que empleó la observación participante y entrevistas semiestructuradas e informales. Se realizaron entrevistas en varios pueblos del valle del Tambo: Cocachacra, El Fiscal, La Pampilla, La Punta de Bombón, Nuevo Arenal, La Curva y Mejía (Figura 1). Se realizó un total de 60 entrevistas informales y 47 entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas se abordaron a través de una red preestablecida de personas intermediarias (de confianza) de la región, lo que facilitó el establecimiento de contactos iniciales a través de sus redes familiares y comerciales en el Valle de Tambo. Esto fue seguido por un muestreo intencional en espacios públicos (calles, taxis, mercados, tiendas y restaurantes). Después de explicar el proyecto de investigación y garantizar el anonimato de los nombres en el texto final⁴, los participantes identificarían la preferencia por entrevistas informales o semi estructuradas. Esto incluyó numerosas entrevistas con representantes de la compañía, ansiosos por explicar su versión del evento, y agentes municipales a los que nos acercamos o nos presentaron intermediarios. En total, se llevaron a cabo sesenta entrevistas informales y cuarenta y siete semiestructuradas grabadas en audio en las que Carlo Fernández Valencia, coautor de este artículo y que tiene raíces a lar-

³ Sobre las asociaciones público-privadas, véase Hildyard (2016).

⁴ Una entrevista no está fechada a propósito, para evitar la triangulación de la ubicación. Además, las personas seleccionadas entrevistadas insistieron en usar su nombre real a pesar de aconsejarles lo contrario.

go plazo en el valle del Tambo, hizo además de investigador de intérprete. En total, hubo más de 1308 minutos de audios grabados de entrevistas semiestructuradas, con una duración media de cada entrevistas de 28 minutos.

La mayoría de los participantes en la investigación eran mujeres; la muestra de hombres, sin embargo, incluía una amplia gama de ocupaciones: agricultores, pescadores, comerciantes, tiendas de comestibles, funcionarios públicos, representantes de empresas, dirigentes actuales y / o ex dirigentes de grupos de la sociedad civil, conservacionistas, un abogado y un contratista de seguridad privado. Si bien está registrada la ubicación de las entrevistas, no hay indicación de dónde viven los participantes de la investigación, ya que, por ejemplo, un taxista entrevistado informalmente en "La Punta" podría vivir en Mollendo.

El guion de las entrevistas se centró en lo que los participantes de la investigación pensaron sobre el proyecto de la mina Tía María, su experiencia con el conflicto y las acciones de Southern en el Valle para imponer la mina. Los participantes de la investigación estuvieron desproporcionadamente en contra de la mina: las entrevistas semiestructuradas articularon 35 puntos de vista "antiminas" y 11 puntos de vista "pro-mina" (y uno exento), mientras que las entrevistas informales representadas tuvieron 41 "anti-mina" y 19 "pro-mina". Las entrevistas se complementaron con investigaciones secundarias: libros, artículos, periódicos, blogs y material de relaciones públicas. La información se trianguló basándose en material de investigación secundario, discusiones de verificación con intermediarios, temas repetidos de entrevistas y preguntas de seguimiento con varios actores. Debido al nivel de conflicto en esta región, preservar la confidencialidad de los participantes de la investigación es una prioridad en esta contribución.

Tras esta introducción al objetivo y metodología de la investigación presentada, el resto del artículo está estructurado de la siguiente manera. La primera sección revisa la ecología política de la contrainsurgencia, discutiendo su relación con el discurso de guerra social y la violencia dentro de la investigación extractiva. Esto lleva a revisar la relación entre las fuerzas de seguridad peruanas y las industrias de extracción, seguida de una breve cronología del conflicto de Tía María. Las siguientes dos secciones profundizan en el análisis de las diversas técnicas de contrainsurgencia "duras" (directas) y "blandas" (indirectas) empleadas por el estado peruano y Southern en un intento por pacificar el malestar social y facilitar la aceptación de la ingeniería social del proyecto Tía María. La sección final discute la contrainsurgencia de "todo el gobierno" como la ingeniería social de extracción, reconociendo cómo los arreglos institucionales actuales y los imperativos comerciales están diseñados para anular las preocupaciones socio-ecológicas populares sobre la extracción industrial de minerales (véase Orozco y

Veiga, 2018). Apoyándose en el discurso de la guerra social, el artículo sostiene que el aparato estatal y la política sirven como un instrumento de pacificación social y explotación ecológica, a pesar de las preocupaciones ecológicas y climáticas.

2. La ecología política de la contrainsurgencia

El equipo, las técnicas y las estrategias militares siguen siendo fundamentales para el control de la tierra y la extracción de recursos naturales. Las tecnologías coercitivas son fundamentales para lo que Tania Murray Li (2014: 592) llama, "hacer la tierra invertible", que crea las condiciones para la inversión y el desarrollo de la tierra. Para hacer la tierra invertible, Le Billon y Sommerville (2017: 214) explican, que se requiere de tres factores: crear un discurso, exclamando tanto los beneficios financieros como sociales del proyecto de desarrollo; construir y hacer cumplir un marco legal adecuado para las transnacionales, los intereses nacionales y de élite (que a menudo son a expensas de las comunidades rurales); y la movilización de mano de obra, infraestructura y los recursos necesarios para lograr la extracción de recursos naturales. Los esfuerzos gubernamentales y empresariales para controlar la tierra y hacerla invertible han llevado a una creciente investigación que examina la militarización de la naturaleza. Antepuesto por el trabajo académico sobre las relaciones imperiales/coloniales (Galeano, [1973] 1997; Rodney, [1972] 2009), la geopolítica de las guerras de recursos (Le Billon, 2001, 2012), marcos de discursos de seguridad nacional y ambiental (Huff, 2017; Peluso y Watts, 2001), conflictos ambientales (Gedicks, 2015; Martínez-Alier, 2002), teoría del movimiento social (Bebbington et al., 2008: 2888-2905; Middeldorp et al., 2016; Verweijen, 2017: 1-17) y policía (Williams, 2007; Dunlap, 2014b) poco a poco han sentado las bases para que la contrainsurgencia emerja como foco en los conflictos ambientales.

Otras técnicas militarizadas han sido particularmente bien documentadas en otros campos de la ecología política como por ejemplo en relación con la conservación de la naturaleza, como se refleja en la noción de "militarización verde" (*Green militarization*) (Lunstrum, 2014; Massé y Lunstrum, 2016), "la violencia verde" (*Green violence*) (Büscher y Ramutsindela, 2016), las guerras verdes (*Green Wars*) (Büscher y Fletcher, 2018) y la ecologización de las fuerzas armadas (*Greening of the military*) (Bigger y Neimark, 2017; Dunlap, 2017). La investigación de la ecología política en la contrainsurgencia revela que no sólo es fundamental para la formación del estado-nación, sino también para la creación de "bosques nacionales", las ciudades actuales y la producción de espacio en general (Peluso y Vandergeest, 2011). La contrainsurgencia y el crecimiento económico mantienen una profunda afinidad con respecto a las formas en que los esfuerzos de seguridad militar crean las condiciones para la acumulación de capital, ya sea en relación con los parques de conservación (Verweijen y Marijnen, 2018; Ybarra, 2012); esquemas de desarrollo (Copeland, 2012; Devine, 2014;

Grajales, 2013; Marijnen, 2017; Paley, 2014; Price, 2014); La economía verde o las "mercancías del cambio climático" (Dunlap y Fairhead, 2014: 938; Dunlap, 2017, 2018a). Además, la contrainsurgencia y la extracción de recursos naturales, como se explicará más adelante, mantienen una relación que es a la vez un matrimonio ilustre y un asunto secreto.

La contrainsurgencia es definida por Kilcullen (2006: 29, 31) como "una competición con el insurgente por el derecho y la capacidad de ganar los corazones, las mentes y la aquiescencia de la población", en donde "corazones" se explica como "persuadir a la gente de que sus intereses se benefician de tu éxito", y "mentes", "convenciéndolos de que puedes protegerlos, y que resistirse no tiene sentido". La contrainsurgencia es un tipo de guerra - de "baja intensidad" o un combate "asimétrico" - y un estilo de guerra [*warfare*] que enfatiza las redes de inteligencia, operaciones psicológicas, manipulación de medios, provisión de seguridad y desarrollo social para mantener el gobierno y, en el caso siguiente, legitimidad extractiva (FM3-24, 2014; Dunlap, 2018b). La pacificación y el establecimiento del control político, como lo demuestra el coronel Erwin Brigham (1968: 27), no se centra únicamente en la fuerza coercitiva, sino que inicia "actividades económicas y sociales" relacionadas con la apertura de carreteras, vías fluviales "y el mantenimiento de vías de comunicación importantes para la actividad económica y militar". La contrainsurgencia combina la fuerza bruta de la guerra convencional "dura" y las estrategias de guerra social "blanda" que forman una estrategia gubernamental-corporativa más amplia, que se refuerza mutuamente, disciplinando, encantando y diseñando/ganando mediante la ingeniería social de la extracción los "corazones" y las "mentes" de las poblaciones objetivo (Dunlap y Verweijen, 2021). Esto frecuentemente incluye, como sugiere el discurso de la guerra social, el ataque preventivo y sistemático contra manifestantes no violentas (Dunlap, 2014b, 2016, 2018b; Brock y Dunlap, 2018) para reforzar la trayectoria actual de la economía política.

Los conocimientos del campo emergente de la ecología política de la contrainsurgencia son importantes, pero sus perspectivas teóricas todavía se deben desarrollar más. La literatura existente conserva diversos puntos de vista y hallazgos basados en análisis históricos, enfatizados en operaciones "duras" de la policía militar coercitiva o tecnologías sociales cívico-militares, entre otras. Mientras que la literatura sobre la militarización verde en cierta medida, es una excepción, el conocimiento sobre los conflictos ecológicos rara vez reconoce el alcance de la violencia o la importancia de un "componente de guerra social". Este componente se define como el reconocimiento, en su totalidad o en parte, de las diversas estrategias, técnicas y tecnologías de guerra entrelazadas con la conformación de tierras, acuerdos de tierra y la protección de las operaciones extractivas "verdes" o convencionales existentes. El término "guerra social"; se origina en la Guerra Social Romana (91-89 a. de C.), donde la República

Romana aprendió la indispensabilidad de las concesiones políticas y el desarrollo de técnicas para la estabilidad interna, en oposición a las técnicas de guerra convencional excluyente (Dunlap, 2014a; Trocci, 2011). Las técnicas de inclusión se desarrollaron, interviniendo en las relaciones socioculturales de las personas mediante el despliegue de servicios sociales, derechos y ciudadanía para pacificar la insurrección y estabilizar internamente una república creciente, que son fundamentales para los procesos de territorialización (véase Rasmussen y Lund, 2018: 388-399) y técnicas de contrainsurgencia "blanda". La guerra social, se podría decir, fue una temprana estrategia biopolítica concesional para consolidar y avanzar el poder imperial.

Realizando el estudio genealógico de la máxima de von Clausewitz ([1827] 2007: 7): "la guerra no es más que la continuación de la política con otros medios", Michel Foucault ([1976] 2003: 60) encuentra "el gran tema y teoría de la guerra social" como discurso central que corrobora las afirmaciones de von Clausewitz. El discurso se resume mejor por sus defensores del siglo XVII, los Diggers:

Tenemos que defendernos de nuestros enemigos porque los aparatos del Estado, la ley y las estructuras de poder no sólo no nos defienden de nuestros enemigos; son los instrumentos que nuestros enemigos están utilizando para perseguirnos y subyugarnos (Foucault, [1976] 2003: 62).

El discurso de la guerra social es un reconocimiento temprano de la biopolítica, articulando una desconfianza radical del poder estatal e institucional, mientras que ofrece una anti-política que, diferente a la de Ferguson (1994), ve el sistema político, su economía, las divisiones de trabajo y la jerarquía como un sistema de subyugación (véase Anonymous, 2012; Dunlap, 2014a; Shahin, 2016). Relevante para la ecología política anarquista (Springer et al., 2019), el discurso de la guerra social estuvo históricamente dedicado a revelar la guerra interna o la guerra social contra las poblaciones (Foucault, [1976] 2003: 89), mientras que la contrainsurgencia es la ciencia de esta guerra, o "la guerra del progreso", diseñada para afirmar el aparato estatal, la economía política/ acumulación primitiva y la sumisión cognitiva a la ideología del progreso (tecnológico-industrial) (Dunlap, 2014b: 55). Mientras algunos afirman que "no hay base para esta concepción" de la política (Owens, 2017: 7), el Teniente Coronel retirado David Kilcullen (2012: 130) nos recuerda que "La contrainsurgencia, entonces, o la contra-insurrección, parece ser una institución social humana duradera que ha sido parte del papel de prácticamente todos los gobiernos de la historia y quizás incluso define parcialmente lo que queremos decir con la palabra "estado." Además, Kilcullen (2012: 145), reconociendo el estado actual de los medios y la tecnología, afirma que "las contrainsurgencias actuales pueden ser 100 por ciento políticas".

El discurso de la guerra social es el reconocimiento de las operaciones de contrainsurgencia, mientras que la ecología política de la contrainsurgencia disecciona las técnicas de guerra socio-ecológica empleadas — en el pasado y presente— para controlar los recursos humanos y no humanos. Se trata de desentrañar la "violencia (estructu-

ral) lenta" necesaria para construir (Gamou y Dauvergne, 2018; Nixon, 2011; Springer y Le Billon, 2016), lo que Foucault ([1977] 1995: 168-169) llama, el "sueño militar de la sociedad" trabajando para perfeccionar una "paz y orden interno" basado en "el dispositivo del ejército perfecto, de la masa disciplinada, de la tropa dócil y útil, del regimiento en el campo y en los campos". Este "sueño militar de la sociedad" es la sociedad industrial, buscando perfeccionar la economía política de las poblaciones, el crecimiento económico y extracción de recursos. La ecología política de la contrainsurgencia cuestiona estas relaciones de coacción y de ingeniería social necesarias para la sociedad industrial, sus iniciativas de desarrollo y las operaciones de extracción de recursos. Así, la ecología política de la contrainsurgencia disecciona los arreglos institucionales, así como la política misma, a medida que los entornos militarizados se normalizan progresivamente en la vida cotidiana de los investigadores, participantes en la investigación y paisajes de todo el mundo.

La ecología política de la contrainsurgencia surge como un estudio de la guerra social, "ampliando la noción de conflicto" y profundizando los enfoques metodológicos de la coerción dentro de la investigación extractiva (Huff, 2017: 168), ofreciendo cuatro pilares preliminares. En primer lugar, la ecología política de la contrainsurgencia cuestiona las relaciones de fuerza o los métodos de violencia científica empleados para dominar, controlar y subyugar a la gente a los imperativos de gobiernos, compañías o facciones de élite. Un componente central, relacionado con la gubernamentalidad (Andreucci y Kallis, 2017), es examinar la construcción y normalización de la legitimidad, que está vinculada a la selección e intervención en las relaciones sociales y socioculturales de las personas, de ahí la guerra social (Dunlap, 2014a). En segundo lugar, estas intervenciones en las personas, como el documento de Peluso y Vandergeest (2011), suelen ir acompañadas de intervenciones en tierras, en naturalezas no humanas y el espacio en general. En tercer lugar, esta perspectiva desentraña la horizontalidad del conflicto comunal o inter-étnico, trazando la economía política de las divisiones sociales y cómo los discursos y las fracturas raciales de casta y de género, se operacionalizan al servicio del control de la tierra y la extracción de recursos naturales. Y estrechamente relacionada con los tres, la cuarta perspectiva se pregunta si y cómo las reacciones políticas desde arriba están socialmente diseñadas al servicio del control estatal, la acumulación de capital u otras agendas políticas y de élite.

"La invasión es una estructura, no un evento", nos recuerda Patrick Wolfe (2006: 388), como contención del discurso de la guerra social y, en gran parte, el foco de la ecología política de la contrainsurgencia. Cuestionando las técnicas de guerra socio-ecológica empleadas para controlar los recursos naturales y humanos, la ecología política de la contrainsurgencia ofrece afinidad con la teoría del post desarrollo y la descolonización al cuestionar activamente la modalidad pasada y presente de esta estructura de invasión, que puede llamarse la matriz colonial del poder, "el estado", "el capita-

lismo", "el industrialismo" o el "sistema tecno-industrial" dependiendo de la perspectiva propia. El enfoque central es examinar el control político y ambiental, y las técnicas y estrategias (bélicas) utilizadas para asegurarlo. Dicho de otra manera, la ecología política de la contrainsurgencia se pregunta, ¿cómo puede cualquier entidad (externa), a menudo en menor número, entrar en una región para capturar recursos, establecer un gobierno y mantener un nivel relativamente alto de legitimidad real o imaginaria? (véase Foucault, [1976] 2003; Dunlap, 2014a, 2019). Esta es la pregunta que se está explorando alrededor del proyecto minero Tía María, que detalla cómo este proyecto minero controvertido y popular está invadiendo y tratando de establecer legitimidad para explotar los recursos minerales en los cerros del Valle de Tambo.

3. Perú: conflictos ambientales y servicios de seguridad

La *Defensoría del Pueblo*⁵ del Estado peruano registró 224 conflictos sociales en 2013, 149 (67%) fueron conflictos socioambientales y 108 estuvieron relacionados con actividades mineras (Lust, 2014). En 2014, las concesiones mineras ocupaban el 20,42% del país (Lapa Romero, 2017: 15), mientras que la inversión minera en Perú aumentó un 3,8%, contabilizando en total 2.833 millones de dólares en agosto de 2017 (MEM, 2018). Organizando el país en torno a un modelo extractivista de desarrollo, una estrategia de crecimiento económico centrada en la demanda de recursos naturales y la extracción basada en el mercado (Bebbington, 2012; Brundenius, 1972), el Perú ha estado plagado de varios proyectos de extracción y, en consecuencia, una plétora de conflictos ambientales con poblaciones rurales e indígenas (Bebbington et al., 2008: 2888-2905; Bebbington, 2012; Bebbington y Bury, 2013; Jaskoski, 2014; Arce, 2014; Gustafson y Guzmán Solano, 2016). Este modelo de desarrollo extractivista, y los conflictos resultantes, han hecho que el ejército y la policía peruana, especialmente la Policía Nacional del Perú (PNP), sean aliados de las empresas de extracción.

En la década de 1980, el arma preferida del grupo terrorista maoísta, Sendero Luminoso, fue la dinamita robada de las minas, utilizada posteriormente para atacar la infraestructura civil y extractiva (McClintock, 2005). Sendero Luminoso sumió a Perú en una guerra revolucionaria en mayo de 1980, que se convirtió en una prolongada "guerra sucia" que duró hasta el año 2000 (véase Stern, 1998). El despliegue de tácticas terroristas por las fuerzas de Sendero luminoso sirvió de pretexto para una serie de leyes, la Ley del Sistema de Defensa (1987), la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa (1987) y una serie de decretos en 1991, 2002 y 2007, que permiten a los militares no sólo asumir el control del orden interno durante los Estados de Emergencia (Jaskoski, 2013: 65), sino también establecer contratos con empresas privadas. En *Military Politics and Democracy in the Andes*, Maiah Jaskoski (2013) revela la aversión de los militares a participar en operaciones de contrainsurgencia interna, lo que hizo de la

⁵ Ver fuente en: <https://www.defensoria.gob.pe/>.

Policía Nacional del Perú (PNP) los perfectos practicantes. En la década de 1990 y principios de la década de 2000 "la policía nacional aumentó considerablemente su participación en la contrainsurgencia" contra las fuerzas de Sendero, explica Jaskoski (2013: 75), hasta el punto de que "la policía nacional ha ampliado sus actividades de contrainsurgencia, potencialmente invadiendo el dominio del ejército y amenazando su futura parte correspondiente del presupuesto". Mientras que la PNP se convirtió en el principal especialista en operaciones de contrainsurgencia, la relación del ejército con las empresas extractivas creció. Además, la constitución alentó a los militares, en virtud de los contratos de los recursos directamente recaudados (RDR), a alquilar equipos (vehículos, helicópteros y equipo especializado, etc.), infraestructura y personal a empresas privadas de petróleo y minerales. Los contratos se redactaron con los comandantes del ejército local y entre los años 2003-2005, RDR comprendía aproximadamente entre el ocho y el once por ciento del presupuesto de defensa y podría cubrir entre el 5 y el 50 por ciento de los gastos operativos de la base militar. Este trabajo resultó muy lucrativo para los comandantes militares y ofreció beneficios para los soldados, como medicinas, pasajes aéreos con descuento y acceso a alimentos y alojamiento más deseables (Jaskoski, 2013). Las compañías extractivas, se volvieron cada vez más influyentes en la dirección de patrullas militares, contratando "unidades del ejército peruano para llevar a cabo patrullas de contrainsurgencia" y, en algunos casos, el ejército realizó trabajo policial para las compañías (Jaskoski, 2013: 168). Entre estas compañías, de acuerdo con "un ex funcionario de seguridad privada" estaba Southern Copper Perú (Jaskoski, 2013: 171), que "recibió protecciones del ejército, lo que sugiere que las empresas mineras privadas han demostrado ser excepcionalmente influyentes en términos de repercusión en el comportamiento del ejército". "Asegurar los recursos estratégicos" se convierte entonces, como destacan Middeldorp, Morales y der Harr (2016: 934), en un proceso recíproco de auto fortalecimiento: "el ejército se despliega para proteger la extracción en curso, y los ingresos de extracción de recursos se invierten a su vez en el ejército". Este ciclo de auto fortalecimiento no se limita al sector extractivo, y está más ampliamente implicado en la creciente militarización y mercantilización de la naturaleza mencionada anteriormente.

Bajo el mandato del presidente Alan García (2006-2011) las alianzas de seguridad público-privada se ampliarían para incluir a la Policía Nacional del Perú (PNP). La interpretación de que los defensores de las tierras indígenas son "el enemigo interno" (Andreucci y Kallis, 2017), antes reservado para Sendero Luminoso, allanó el camino para el Decreto del 11 de julio de 2009 que autorizaba la prestación de servicios adicionales extraordinarios por parte de la Policía (Grufides, 2013: 9), en forma de dos tipos de contratos: *institucionales* e *individualizados*. Los contratos institucionales requieren de un acuerdo entre el Director-General de la PNP y las personas o entidades que solicitan protección, que pueden clasificarse como servicios *permanentes* u *ocasionales*.

El servicio permanente sería por un período específico y ocasional sería para solicitudes cortas entre una y ocho horas. Los "servicios extraordinarios adicionales" individualizados son realizados por oficiales de policía en días de franco (día libre), que sólo requieren un acuerdo con los oficiales individuales (Grufides, 2013: 9) este último podría ser interpretado como legalización del paramilitarismo. Actualmente, la PNP atiende más de 22 minas en más de 11 regiones, con más de 485 policías trabajando con empresas mineras para "prevenir, detectar y neutralizar" amenazas mediante medidas cautelares, vigilancia y patrullas (Grufides, 2013: 10). Las amenazas se entienden como "acciones criminales, asaltos, actos de sabotaje y terrorismo," que también podrían incluir "actos de naturaleza amenazante" especificados como "guerra civil, invasión, insurgencia, huelgas, disturbios internos, disturbios civiles, rebelión, vandalismo y otras acciones criminales y terroristas" (Grufides, 2013: 10). Jaskoski (2013) demuestra que la policía —específicamente la PNP— ha superado a los militares y ha tomado la iniciativa en las operaciones de contrainsurgencia en el país. Entre la PNP destaca la DINOES (División Nacional de Operaciones Especiales) entrenada para actividades antisubversivas y desplegada para apoyar operaciones extractivas (Gustafson y Solano, 2016).

La expansión de la contrainsurgencia por parte de las agencias de seguridad peruanas encaja con los planes de Estados Unidos de enviar más de 3.000 soldados estadounidenses a Perú para la interdicción de narcóticos y para combatir a los insurgentes. *School of the Americas* (SOA) cree que es "un disfraz para el control militar y la represión de los movimientos sociales, especialmente los que defienden sus recursos naturales" (Bravo, 2015: 1; Paley, 2014). Esta proliferación de acuerdos de seguridad público-privados ha transformado a las fuerzas de seguridad pública en contratistas privados. Además, de conformidad con la Ley No. 30151 de enero de 2014, los miembros de las fuerzas armadas y la PNP están exentos de responsabilidad penal si causan lesiones o muerte durante el servicio. Grupos de derechos humanos han llamado a la Ley No. 30151 una "licencia para matar" (FLD, 2017: 2). Estos arreglos también son utilizados por Southern Copper, que registró un acuerdo en 2010 con la PNP XI Dirtepol de Arequipa para "proporcionar servicios extraordinarios" bajo un contrato de "servicio individualizado"⁶ (Palomino, 2015). Así pues, la Ley No. 30151 otorga impunidad al personal de seguridad, lo que parece haber surtido efecto durante el conflicto de Tía María.

⁶ Con el 20% de la cantidad pagada a las ofertas encargadas y no encargadas directamente en la cuenta de la PNP del Banco de la Nación.

4. El proyecto y el conflicto de Tía María

Southern comenzó a realizar extensos estudios geológicos y geoquímicos en 2003, que fue seguido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) que concedió la aprobación para una evaluación de impacto ambiental (EIA) en 2006 (Castillo Fernández et al., 2011). Sin embargo, desde 2012, el MEM es responsable de aprobar los EIA (estudio de impacto ambiental) y no el Ministerio del Ambiente (Lust, 2014). El proyecto Tía María buscó extraer 120 mil toneladas de cátodos de cobre por año durante 18 años con una inversión de 1.400 millones de dólares y tres sitios de extracción y procesamiento. El primer yacimiento minero es "La Tapada" en la Pampa Yamayo, que es el yacimiento que se ubica más cerca de Cocachacra, de El Fiscal y el río Tambo. Ejemplificando la noción de "ciencia corporativa" de Stuart Kirsch (2014), las mediciones de Southern afirman que "La Tapada" está a 3 km⁷, mientras que investigadores independientes demuestran que está a 1,2 km⁸ y los lugareños afirman que la distancia desde el río Tambo está entre 500 y 700 metros⁹. El segundo es el yacimiento de "Tía María" en la quebrada de *Cachuyo* que según la empresa está a 7 km del Valle de Tambo y, en tercer lugar, el sitio de procesamiento y lixiviación en Pampa *Cachendo* que está a 11 km del Valle (véase Figura 1).

Southern ingresó al Valle de Tambo de una manera similar a los proyectos de energía eólica en México (Dunlap, 2018c, 2019), que consistía en acercarse a los organismos políticos nacionales, los líderes municipales locales y finalmente, los grupos de la sociedad civil. La presidenta del Frente Amplio de Defensa e Intereses de Desarrollo de la Provincia de Islay¹⁰, Catalina Torocahua, explicó que en "2006 la mina se hizo conocer como resultado de la usurpación de los límites de la ciudad" y en 2007 la compañía entró formalmente a hablar con las autoridades: alcaldes y líderes¹¹. En ese momento Catalina estaba tratando de iniciar un proyecto de agua potable en el Valle, llamado Plan Maestro. Finalmente, una vez que un representante de Southern se acercó a Catalina, explicando que si ella aceptaba la mina "su proyecto de agua potable se logrará, porque la mina va a dar un gran canon minero¹², y supuestamente este canon minero hará de este proyecto una realidad"¹³. Catalina, consciente de los costos ecoló-

⁷ Southern Copper, disponible en : <https://www.youtube.com/watch?v=Pd1OL9EEj4k>

⁸ Ver minutos 6:30-7:00 del documental *La Batalla del Cobre* (Álvarez, 2016).

⁹ Entrevistas 1, 30 y 37.

¹⁰ El Frente Amplio está compuesto por pobladores campesinos u opositores al proyecto minero, y representados por sus líderes locales, sociales y políticos (Ugarte, 2020).

¹¹ Entrevista 1, 13-01-2018.

¹² La ley Canon Minero de 1992, permite que el 20% del impuesto a la minería corporativa se asigne a los territorios donde operan las empresas. En 2001 el canon minero se elevó al 50% y amplió este impuesto a otras actividades extractivas (véase Bebbington, 2012: 92).

¹³ Entrevista 1, 13-01-2018.

gicos de la minería, expresó serias dudas basadas en su conocimiento de la minería en Moquegua, Tacna y La Oroya. El representante de la compañía respondió asegurándole que había una "abundancia de agua", que la contaminación y las partículas de la mina no se propagarían ni cubrirían los cultivos. Catalina respondió afirmando que "lo que es lógico es que ningún alcalde o líder decida, debe ser una consulta popular y nadie debe oponerse a esto", a lo que, según Catalina, el representante de Southern respondió: "Ya hablé con los alcaldes y líderes y ellos ya estuvieron de acuerdo".

La oposición al proyecto Tía María estaba arraigada en experiencias pasadas con las operaciones de Southern y la minería en general (Radio Uno, 2011; La República, 2013). Catalina y otros participantes en la investigación hicieron referencia a una serie de minas: La Oroya, una distante fundición de cobre; Cuajone en Moquegua y Toquepala en Tacna¹⁴ fundiciones de cobre operadas por Southern en la provincia vecina; en Tacna operado por otra compañía Minsur; Cerro Verde mina de cobre en Arequipa; y la más importante, la refinera y la fundición de Southern de Ilo en Moquegua. La gente afirma que la fundición de Ilo produjo lluvia ácida en el Valle de Tambo, matando todos los olivos en la década de 1970. Esta es una historia común vinculada a la creencia de que Southern autorizó el asesinato del agrónomo y opositor de la fundición de Ilo, Carlos Guillén Carrera el 2 de octubre de 1998 (Rosado, 2019).

Las experiencias previas con proyectos mineros, combinados con la fuerte cultura agraria del Valle de Tambo sentaron las bases para una resistencia ardiente. Hay cerca de 40.000 personas, sostiene Lapa Romero (2017) en su nuevo libro *Lo Que Los Ojos No Ven*, que están ancladas y articuladas directa o indirectamente en la economía agraria. En Cocachacra, según Lapa Romero (2017), hay 2000 propietarios, 7000 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios) junto con 8000 jornaleros. En el distrito de Cocachacra, según el censo de 2007, 47,15% de la población económicamente activa se dedica a la actividad agrícola, 11,72% al comercio minorista, 5,63% al transporte, 4,36% a hoteles, 4,16% a la construcción y 3,53% a la explotación de minas y canteras (Lapa Romero, 2017: 21). Mientras que las personas dedicadas a la agricultura también participan en pequeñas operaciones comerciales, la demografía de Cocachacra es similar en otros distritos, a menudo con la agricultura en el percentil 60 (Lapa Romero, 2017: 21-30). La columna vertebral y la existencia del Valle del Tambo es la agricultura, que no sólo conserva una fuerte economía agraria, sino también una cultura en que la minería es generalmente entendida como amenazante.

Hay tres razones principales por las que la población rechaza la mina: (1) uso de agua subterránea; (2) contaminación de las aguas subterráneas y (3) contaminación del aire. Southern afirma que el viento sopla hacia la costa, lo que implica que el viento no llevará partículas mineras hacia el Valle, sin embargo, como Catalina y otros señalaron los cambios de la corriente de vientos a diario entre la costa y la tierra, el

¹⁴ Ver localización en ejatlas.org ([enlace](#)).

efecto de la brisa marina nocturna, destacando así una idea errónea popular difundida por Southern que afianza la desconfianza existente. En cuanto al impacto socio-ecológico, era común que los residentes sintieran que "la mina es sólo destrucción", "es una muerte lenta" y, refiriéndose a los fondos de desarrollo social: "¿De qué sirve tener escuelas, clínicas médicas, universidades si nos van a matar lentamente?"¹⁵. El vínculo entre una violencia lenta y la minería es claro para la mayoría de los residentes (Nixon, 2011; Springer y Le Billon, 2016). Además, las oportunidades de empleo que ofrece la Southern no sólo son limitadas en comparación con las que ofrece la agricultura en el Valle, sino que requieren conocimientos técnicos que discriminan a los trabajadores jóvenes, ancianos y a los no cualificados. Lapa Romero (2017: 46) sostiene que la "fase operativa de Tía María apenas daría empleo a 600 trabajadores, mientras que la economía agraria ofrece empleo a más de 20.000 familias". Por último, al igual que otros investigadores, Catalina rechaza la idea de que las autoridades aprueben la mina Tía María sin lograr el consentimiento general de la población o la "licencia social".

Hubo tres consultas públicas organizadas por Southern en noviembre de 2007, julio de 2009 y agosto de 2009. A pesar del escepticismo popular y la desconfianza arraigada en las experiencias con Ilo, Moquegua y la desinformación sobre las corrientes de viento, las consultas cobraron fuerza y la compañía ofreció tres métodos de utilización de agua para la mina, el agua de río, de suelo (subsuelo) o de mar. Durante la consulta de agosto de 2009, el EIA (estudio de impacto ambiental) no favoreció al proyecto de desalinización de agua de mar y los residentes —basándose en el hallazgo de Documentos de identidad encontrados—¹⁶ alegaron que Southern trajo personas en buses "desde afuera" para las consultas públicas, notablemente estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para "fabricar" el consentimiento para la mina (Lapa Romero, 2017). Las consultas como espacios para la fabricación del consentimiento son comunes (véase Bebbington, 2012; Dunlap, 2017: 1-21; Gamu y Dauvergne, 2018), sin embargo, esto desencadenó en disturbios y ataques contra representantes de Southern con piedras, palos y sillas de plástico¹⁷ (Jaskoski, 2014). En ese momento, el Frente de Defensa e Intereses del Valle del Tambo, inspirado en conflictos anteriores en Tambo grande y la Minera Majaz (Arce, 2014), comenzó a implementar la idea de Catalina de realizar una consulta popular contra el proyecto Tía María y su EIA. En octubre de 2009 el Frente de Defensa organizó la consulta popular en Cocachaca, Punta de Bombón y Deán Valdivia, resultando en un 93,4% de rechazo al proyecto Tía María por parte de los votantes (Sullivan, 2015). Esto llevó a una organi-

¹⁵ Entrevista 11, 13-01-18; Entrevista 20, 15-01-18; y Entrevista 34, 17-01-18.

¹⁶ Entrevista 42, 18-01-2018.

¹⁷ Véase la noticia en la primera edición de Audiencia Cocachacra el 28 de agosto de 2009, disponible en [youtube.com \(enlace\)](https://www.youtube.com/watch?v=...).

zación continua, protestas generalizadas y huelgas convocadas contra Southern en 2010 (Bedregal y Scott, 2013), mientras que 4000 miembros de la PNP estaban listos para ingresar al Valle, el MEM optó por contratar a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) para evaluar EIA de Tía María (Castillo Fernández et al., 2011; Jaskoski, 2014). Luego, en marzo, justo antes de que UNOPS publicara el informe, se canceló el contrato debido a restricciones presupuestarias del MEM (Sullivan, 2015). Sin embargo, el informe de UNOPS se filtró y reveló 138 observaciones, incluida la falta de un estudio hidrológico y la falta de reconocimiento de otros minerales (por ejemplo, molibdeno, plata, oro) en la concesión (Castillo Fernández et al., 2011: 80-3; Sullivan, 2015). Cuando quedó claro que el gobierno ignoraría las 138 observaciones de UNOPS, se organizó una huelga indefinida para el 23 de marzo de 2011.

El estado respondió con represión. La PNP inundó el área, la policía atacó y las protestas se intensificaron, lo que dio lugar a los ahora infames *Espartambos* (Figura 2)¹⁸. Haciendo referencia a los espartanos de la película *300* en el valle de Tambo, estos individuos tomaron una posición de autodefensa combativa contra la policía, ampliamente reconocida por agarrar grandes láminas de hojalata y madera para usar como escudos para bloquear las balas de goma, perdigones y piedras de la policía. El conflicto se intensificó, con la policía disparando y matando a cuatro personas: Andrés Taipe Chuquipuma el 4 de abril seguido de Néstor Cerezo Patana, Aurelio Huarcapuma Clemente y Miguel Ángel Pino el 7 de abril de 2011 (Sullivan, 2015). Esto llevó al gobierno a retirar temporalmente el proyecto Tía María, ya que la huelga paralizó el valle y el conflicto sembró terror y resentimiento.

Esta victoria, sin embargo, duró poco. Southern lanzó una campaña informativa para reingresar al Valle, que luego, según Carlos Aranda, jefe nacional de "relaciones comunitarias" de Southern, a fines de 2012 fueron "convocados por el Ministerio de Energía y Minas" y "nos dijeron que: Estamos dispuestos a darle otra oportunidad, así que sigamos adelante con Tía María"¹⁹. El gobierno impuso tres condiciones a Southern: (1) una planta desalinizadora; (2) rehacer el estudio de impacto social y (3) cumplir con las observaciones de UNOPS. Aranda, explica: "Hicimos las tres"²⁰. En enero de 2013, Southern inició una campaña de relaciones públicas de un espectro amplio y una nueva EIA en noviembre de 2013. Mientras tanto, la gente inició huelgas de hambre contra Tía María en Arequipa en diciembre y octubre de 2013 (Lapa Romero, 2017). Sin embargo, finalmente, la nueva EIA fue aprobada en agosto de 2014, ya

¹⁸ Entrevista 2, 12-01-2018.

¹⁹ Entrevista, 24, 16-01-2018.

²⁰ Entrevista, 24, 16-01-2018.

que el MEM afirmó que todas las observaciones fueron resueltas. A pesar de las muertes, el riesgo de inversión y la oposición popular, el gobierno decidió permitir el proyecto.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), sin embargo, encontró los mismos problemas que con el EIA anterior con respecto al análisis hidrogeológico y del subsuelo, y la falta de información sobre el tanque de limpieza y la planta chancadora. Otras objeciones se relacionan con las partículas de construcción y el riesgo de evaporación del ácido sulfúrico que podría causar lluvia ácida. Además, el nuevo estudio evadió las evaluaciones sobre los impactos ecológicos de la planta desalinizadora en la conservación de los humedales cercanos²¹ y también descuidó la participación de la comunidad en el estudio (Lapa Romero, 2017; Sullivan, 2015). Estas irregularidades llevaron al Frente de Defensa a solicitar a UNOPS la revisión de la nueva EIA, que fue denegada.

Figura 2. Espartambos en primera línea luchando contra la policía y sus vehículos blindados, 2015.



Fuente: fotografía de Miguel Mejía Castro.

Una vez que se rompieron las negociaciones, se convocó una huelga indefinida el 23 de marzo de 2015. Una vez más, el Valle estalló en protestas, bloqueos de carreteras y, finalmente, combates con la PNP. El entonces jefe de "relaciones comunitarias" del proyecto Tía María de Southern, Julio Morriberón, declaró el 27 de marzo una vez más el retiro del proyecto Tía María, primero por "la embestida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo anti minero" y "en segundo lugar, la parálisis del Estado en su pa-

²¹ Entrevista, 47, 18-01-2018.

pel de promover las inversiones y dar las garantías necesarias para ponerlas en marcha" (Daly, 2015). Aprovechando el discurso sociopolítico de terruco, o terrorista, Southern emplea el dispositivo cultural de la Guerra Sucia que visualiza a los pueblos rurales e indígenas (de piel cobriza) como subhumanos, fanáticos y violentos terroristas. La palabra "terruco"²² sugería la imagen de personas de extracción indígena que cometían actos de violencia sanguinaria que, a su vez, revelaban (es decir, "confirmaban") su condición de individuos hipócritas, fanáticos, traidores, antipatriotas e incluso subhumanos (Aguirre, 2011: 110), criminalizando y justificando las tácticas de contra-insurgencia contra las poblaciones de la sierra peruana durante la guerra interna. Esta tendencia ha continuado (Bebbington, 2012; Andreucci y Kallis, 2017), y, recientemente, después de la exposición de Primitivo Evanán, en el Museo de Arte de Lima (MALI), fue calumniada como "apología al terrorismo" (Wiener, 2018), destacando este dispositivo sociopolítico se ha acuñado el verbo "terruquear" para referirse a una "estrategia política que utiliza el miedo al terrorismo para su beneficio" (Trelles, 2018). Morriberón, y más tarde Aranda (La República, 2018), podemos decir que son "terruqueadores", personas que están operacionalizando el discurso del terrorismo desde la Guerra Sucia para incentivar, y posteriormente justificar, la intervención policial y militar para hacer cumplir el funcionamiento de la mina Tía María.

En abril, el conflicto se intensificó aún más. Tres vecinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad: Victoriano Huayna Nina, Henry Checla Chura y Ramón Colque, y un policía, Alberto Vásquez, que fue asesinado. Esto finalmente dio paso a que el presidente Ollanta Humala declarara el estado de emergencia el 9 de mayo de 2015, con la presencia de 3.000 policías y 2.000 militares (Lapa Romero, 2017). La siguiente sección explorará el terrorismo de estado y las tácticas "duras" de contrainsurgencia desplegadas durante las invasiones policiales y el estado de emergencia para hacer cumplir la extracción de minerales.

5. Aterrorizando el valle: el estado, la PNP y el ejército

La impugnada aprobación de la EIA y el despliegue de la PNP y más tarde, los militares contra la huelga solo reforzaron la creencia existente de que los políticos a nivel nacional y local habían sido comprados por Southern. "Los políticos solo quieren llenarse los bolsillos porque no les importan las consecuencias, las consecuencias que van a afectar a todos ellos no van a vivir aquí" explica una madre descontenta, "nos prometen [terminar con tía María] cada tiempo vienen aquí, pero cuando entran como presidentes empiezan a estar de acuerdo con los contratos y todo eso, - son tramposo"²³. El presidente Humala llegó al Valle de Tambo antes de las elecciones de 2011 proclamando que Tía María "debe ser revocada" y que "la voz del pueblo tiene un ca-

²² Definición de terruco dada por Aguirre en su artículo.

²³ Entrevista, 10, 13-01-2018.

rácter vinculante ante cualquier decisión política"²⁴ (Álvarez, 2016), luego cuatro años después declaró el estado de emergencia contra el Valle pidiendo "caer con todo el peso de la ley a los delincuentes, asesinos y extorsionadores"²⁵. Los políticos y dirigentes locales tienden a tener una dinámica más antagónica con la mina, pero, como revela Lapa Romero (2017: 54), hay "candidatos mineros" patrocinados por Southern "con el objetivo de legitimar y promover sus intereses". En diciembre de 2017, Yamila Osorio, la actual gobernadora de Arequipa, aceptó una donación de 770.000 soles (aproximadamente 235.503 dólares) a la semana antes de anunciar que Tía María comenzaría a operar en marzo de 2018 (La República, 2017). El escándalo de sobornos de Odebrecht, que colocó al expresidente Humala y su esposa en prisión preventiva y provocó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, sirve como un recordatorio del alto perfil de la corrupción política sistémica que los residentes asocian con el proyecto Tía María (BBC, 2019). La desconfianza y el desprecio por los políticos caracterizarían la mayoría de las entrevistas, pero, en un régimen neoliberal (Springer, 2016), la línea entre el soborno y la negociación de contratos, el sector público y el sector privado transnacional es cada vez más fina.

Los residentes del valle de Tambo están convencidos que la PNP y los militares trabajan para Southern. "En realidad no es el estado que declara el estado de emergencia es el proyecto que induce al estado a través del poder que tiene para declarar el estado de emergencia ¿para qué? ... para poder apagar o minimizar las protestas," dijo un conservacionista, que continua: "Mire imagínese traen cuantos policías para agarrar y defender una empresa mientras que en otras ciudades hay crimen, hay robos y no hay policías, o sea, policías hay para defender un proyector ... un cerro, pero no hay policías para defender a la población pa' cuidar a la población, ¿qué raro no?"²⁶. Carlos Aranda representante de Southern, sin embargo, describe la situación en 2011 de esta manera:

Tuvimos tres personas que murieron en este proceso. No porque estuvieran en nuestra propiedad o en parte del proyecto, fueron asesinados porque la turba decidió bloquear las carreteras y en Perú eso es ilegal. Cuando fueron a bloquear una carretera importante, como la Panamericana Sur, y la bloquearon durante días, entró la policía y la violencia se apoderó del Valle y tres personas murieron (Entrevista 24, 16-01-2018).

Representantes de Southern enfatizan que se adhiere a la "normativa ambiental" y al "estado de derecho", mientras que los manifestantes no. "Lo que pasó muy lamentable, los muertitos, que en paz descansan, que fallecieron en esas protestas [...] Terrible" dice el jefe de relaciones comunitarias del proyecto Tía María continúa afirmando

²⁴ Véase discurso de Ollanta Humala en el año 2010 en Cocachacra en Mollendinos TV a raíz del paro en Islay en mayo de 2015, disponible en youtube.com ([enlace](#)).

²⁵ Véase el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala del 15 de mayo de 2015 en TV Perú, disponible en youtube.com, ([enlace](#)).

²⁶ Entrevista 26, 16-01-2018.

que, "Lo cierto es que Southern como cualquier ser humano, también tiene la capacidad de decir basta"²⁷. Aparte de la mala elección de palabras, refiriéndose de "muertitos", esta afirmación defiende el derecho de la transnacional a frenar las oposiciones populares a sus operaciones.

La huelga indefinida de 2015 desató la furia del Estado (Figura 4). Comenzó con marchas y bloqueos de carreteras (Figura 3), con mujeres, niños y ancianos liderando las manifestaciones, cuando, según la mayoría de los relatos, "la policía llegó y empujó, usó sus varas y luego la gente también usó palos de caña y la policía comenzó a utilizar bombas lacrimógenas. Entonces la gente respondió con lo que fuera". En 2011 y 2015 las acciones policiales fueron brutales: golpear a la gente disparando gases lacrimógenos, e incluso disparando balas a la gente. En el frente táctico desplegaron policías encubiertos e informantes; monitorearon el área con drones; y patrullaron el aire con helicópteros que también lanzaron gases lacrimógenos y arrojaron piedras sobre los manifestantes. Además, participaron en actos diseñados para crear depredación y estrés psicológico quemando campos de arroz; e incluso atacando con gases lacrimógenos las procesiones fúnebres de los muertos durante las manifestaciones; así como los repetidos relatos de policías incriminando a personas una vez arrestadas.

Recordando el evento de Kali descrito en la introducción, otro ejemplo es el caso de Antonio "Miguelito" Coasaca. El 23 de abril de 2015, la DINOES una división de la PNP golpeó y arrastró a Coasaca por la carretera, luego sufrió una conmoción cerebral, la policía le rompió la mano y le metió un "miguelito" (abrojo) para luego de esto, llamar a un periodista cercano para que tomara una fotografía como prueba. Esta acción policial se documentó en un video (La República, 2015) y luego fue llevado a juicio (Redacción RPP, 2017). El abogado Héctor Herrera, que defendió a Coasaca y a más de 120 personas del Valle durante este período, recuerda: "Tengo gente que le han sembrado balas, dinamita, todos los días venía alguien con piedras con huaracas con todo y los policías diciendo: "yo lo he visto." Herrera continua, "Hay un estado delincuencial que ordenaba a los policías sembrar pruebas, fiscales que se coludían con ellos, procuradores públicos que hacían lo mismo..."²⁸. Esta acción legal fue precedida por personas que afirman que la policía encubriría las pruebas sacando los cuerpos de los hospitales, lo que además retrasaría e impediría la atención médica. "Encima que nos han matado", explica Kali " (cuando) ha caído un hermano, nosotros nos lo vamos a llevar, seguían (la policía) metiendo bombas lacrimógenas, no nos dejaban llevar a nuestros muertos"²⁹. Afirmando que Ramón Colque "se desangró hasta morir" y "mucha gente quería ayudarlo, pero "la policía no nos permitió", explica una mujer que

²⁷ Entrevista 43, 18-01-2018.

²⁸ Entrevista 42, 18-01-2018.

²⁹ Entrevista 2.2, 19-01-2018.

continúa diciendo que la policía “robó el cuerpo de la clínica y creo que querían hacerlo desaparecer o algo así”³⁰. Las riñas por cadáveres y heridos en clínicas y hospitales fueron frecuentes durante las huelgas indefinidas.

Figura 3. Los manifestantes se paran detrás de una barricada en Cocachacra.



Fuente: fotografía de Miguel Mejía Castro.

El comportamiento violento de la policía se intensificó durante el estado de emergencia. La policía cortó las luces en el Valle, arrojó piedras y gas lacrimógeno a las casas y realizó redadas nocturnas en las casas de los presuntos organizadores o Espartambos. Dos mujeres explican:

M1: “Fue un abuso terrible... hicieron lo que les dio la gana con nosotros. Se entraban a las casas a las 4 de la mañana a sacar a todos los chicos, según ellos porque les soplaban”³¹.

M2: Apuntando a las personas de fuera... “entraron a la casa de la señora María, si entraron en la medianoche y sacaron a su esposo”.

E: “¿con que motivo aparente?”.

M2: “Por lo que era Espartambo... decían que era Espartambo”.

Luego en la conversación la segunda mujer cuenta que la policía les decía: “cállate terrorista de “M” me dijeron”. Cuando les suplicaba que no lanzaran gas lacrimógeno a su casa donde vivía su madre enferma con bronquitis y “estaba delicada de salud, sufre del corazón”. La policía lo hizo de todos modos y tuvieron que llevarla al hospital

³⁰ Entrevista 12, 14-01-2018.

³¹ “Soplaban” es una forma coloquial de decir que los acusaban.

de Arequipa³². El trauma dejado por la policía saldría a la superficie con ojos de rabia, miedo y lágrimas. Durante las entrevistas, las mujeres mayores rompían en llanto repetidamente al recordar cómo la policía perseguía, golpeaba y arrastraba a la gente por la calle o cuando la policía allanaba las casas por la noche y sacaba a la gente de la cama, mientras los niños estaban desnudos en la calle gritando y llorando. Mientras tanto, los militares se quedaron mirando con rifles de asalto (Fig. 5) y, según algunos relatos, incluso criticaron el comportamiento de la policía. Una persona contó que un militar incluso dijo: "a veces quiero agarrar mi arma y disparar a la policía. Porque no me gusta cómo tratan a las ancianas, las empujan y patean"³³. Esto no solo resuena con relatos anteriores de Jaskoski (2013), que el ejército peruano se abstiene de las operaciones internas, sino también con las primeras observaciones de Hanna Arendt ([1951] 1962: 289) sobre las capacidades mejoradas de la policía para terror.

Debido al comportamiento brutal y los asesinatos de la policía, además de que tenían "cabello largo, cicatrices en la cara, barbas [y] tatuajes"³⁴, la gente estaba convencida de que no eran policías, sino personal de seguridad de la mina: "no eran policías eran mineros vestidos como policías, Sí, contratados por Southern"³⁵. Un ex contratista de seguridad privada militar, en el negocio desde hace más de quince años, Jim explicó que "además del servicio de inteligencia aquí en Perú, existen los mercenarios famosos" que son enviados al "frente" de los conflictos, "porque cuando la policía comete excesos, se meten en problemas". Según Jim, la policía contrata mercenarios con fines de negación plausible, lo que complementa los relatos de 2015 de que la PNP tenía etiquetas de nombre desconocidas que decían "FilosofeXXX" (Palomino, 2015). Al preguntarle a Jim sobre esto, respondió: "en algunos casos, se visten solos como policías, porque también quieren protegerse". Esta preocupación se superpuso con el despliegue de policías encubiertos e informantes en las manifestaciones; muchos fueron capturados y confesaron que les pagaron 100 soles para asistir a reuniones y manifestaciones³⁶. Ingrid explicó: "inclusive... nuestra gente... también... hemos logrado capturar a los infiltrados, a más de tres, de cuatro, hasta mujeres infiltradas, la gente los ha castigado, los ha golpeado, porque ellos son los que van y buscan la información, buscan tener pruebas, [...] gente que la mina les paga para que vayan y se camuflen con el pueblo, pero nosotros acá nos conocemos en el valle, tú ves a una persona que no es de aquí, aunque se vista de short y polo, al toque tú te das cuenta, este no es de

³² Entrevista 17, 15-01-2018.

³³ Entrevista 40, 18-01-2018.

³⁴ Entrevista 1, 2, 17, 19, 26, 40 y 41.

³⁵ Entrevista 19, 15-01-2018.

³⁶ Bitácora ,14-01-2018; Entrevista 2.2, 12-01-2018.

acá...³⁷. Durante el estado de emergencia también se utilizaron informantes para señalar las casas de los organizadores de la protesta y los Espartambos: "ha habido policías infiltrados, entonces es más, de que ya (ellos) tomaban nota, donde vive 'tal' y ya en la noche lo sacaban"³⁸.

Herrera sugiere la posible presencia del Grupo "Terna", una división encubierta de la policía. Jim, sin embargo, explicó que no sólo en "la mayoría de los casos" las empresas mineras "trabajan con DINOES", sino que "cada empresa minera y petrolera tiene su propio servicio [secreto] que llamamos servicios especiales". Este contratista de seguridad continuó explicando cómo cada empresa de extracción de recursos en Perú tiene algo llamado "Asuntos Internos", que es el "servicio de inteligencia" de las empresas de extracción, integrado en su mayoría por exmilitares y personal de seguridad, que se especializa en "contra-inteligencia" y es responsable de neutralizar la oposición contra la mina y sofocar los intentos de espionaje corporativo y robo de concesiones. Jim explicó que el trabajo de asuntos internos era pacificar a la oposición, que incluía negociar "un millón" de soles con los líderes locales de la oposición para detener las protestas por un tiempo determinado y continúa: "Entonces los engañan con una clínica médica, con donación de ropa para niños, o mantas, así que algo que se ve muy bien para la comunidad, pero en realidad no es nada. Entonces lo manejan de esta manera. Entonces, ¿qué hace un Departamento de Asuntos Internos? Empiezan a controlar al líder" y si el líder empieza a pedir más o rompe su trato protestando para negociar más dinero con la empresa extractora, entonces "a veces se encargan de hacerlo desaparecer del mapa".

Esto resuena con el caso de Pepe Julio Gutiérrez, exlíder del Frente de Defensa del Valle Tambo, quien en enero de 2018 fue acusado a treinta años y seis meses por negociar 1,5 millones de "lentejas" para poner fin a la huelga indefinida con un abogado de Southern en 2015 (La República, 2018). Lapa Romero (2017: 99) sostiene que esta fue una estrategia para fragmentar el movimiento social, lo que sigue siendo plausible ya que el abogado de Southern no fue llevado ante los tribunales. Este caso tiene relación con las recomendaciones del general Kitson (2010/1971: 69-71) sobre cómo utilizar la ley como método para neutralizar a los activistas y "deshacerse de los miembros del público no deseados" (véase también Churchill, 2002/1989: 44). No obstante, se revela el lado oscuro de los conflictos ambientales: cooptación, asesinato y "neutralización" por todos los medios. Finalmente, refiriéndose a esta investigación, Jim concluyó: "Las cosas que estás haciendo son trabajo de inteligencia y, para que tengan su equipo de contrainteligencia, espero que esta [investigación] no se detecte en ningún momento; de lo contrario, tu tendrás problemas muy graves".

³⁷ Entrevista 12, 14-01-2018.

³⁸ Entrevista 2, 12-01-2018.

Figura 4. La PNP y la DINOES con vehículos de transporte blindados de estilo sudafricano.



Fuente: fotografía de Miguel Mejía Castro.

Figura 5. Helicóptero militar se cierne sobre las empanadas de arroz, mientras los soldados montan guardia.



Fuente: fotografía de Miguel Mejía Castro.

Al hablar de la violencia política en el Valle de Tambo durante 2011-2015, las personas presentes en las manifestaciones o los familiares de los muertos estaban convencidos de que había francotiradores presentes en las manifestaciones. Por ejemplo, Néstor “[...] A él le dieron justo en la frente, justo en la frente, ósea eso no es accidental o una bala perdida, no es, tampoco somos tan tontos para no darnos cuenta de que eso fue un francotirador...”³⁹. Hacerle esta pregunta a Jim provocó esta respuesta:

A eso se le llama guerra asimétrica, entonces con eso te estoy diciendo [desde el punto de vista de la empresa] si me sigues molestando te va suceder lo mismo..., y de otra forma, o sea, es una forma de debilitar al grupo, si tú eres la cabeza principal, tu mueves 20 Personas, entonces yo no lo voy a matar a él[otra persona], yo te voy a matar a ti, porque te neutralizo y a ellos los debilito..., ¿quién los dirige?; nadie los va dirigir, o sea de ese grupo tiene que nacer otro [líder], y me lo vuelve a tirar [matar] y así es.

P: Y a propósito de guerra asimétrica, ¿qué tan involucradas están las compañías mineras en estrategias de guerra asimétrica?

Siempre lo hacen, siempre lo hacen. Como te digo, para debilitar al grupo.

P: ¿La guerra asimétrica es parte de lo que tienen que hacer?

Es parte del proceso.

P: ¿Siempre es parte del proceso?

Esto es más en el último de los casos. Cuando la situación ya se pone muy difícil ... ya se generó “tal” problema que no lo pueden controlar, cuando no lo controlan con dinero, este es el último recurso. Y, sobre todo, cuando el dirigente, que mayormente se hace con los dirigentes, digamos ya recibió 1 millón [de soles], pero de aquí en dos meses o tres meses, otra vez quiere más dinero.

(Entrevista 36, 17-01-2018).

Esto muestra el cómo y dónde se encuentran los enfoques “suave” y luego “duro” para gestionar la oposición, lo que demuestra la intrincada relación entre la contrainsurgencia y las operaciones de extracción de recursos. Si bien Jim no trabajaba para Southern, confirma que hay gente “todavía en el ejército [...] trabajando en inteligencia [...] con ellos”⁴⁰. Sin embargo, está claro que “sin técnicas de guerra asimétrica los manifestantes pueden paralizar las operaciones mineras y en un día la empresa perderá millones” (Franks et al., 2014). Esto enfatiza la importancia de la contrainsurgencia en la investigación extractiva, ofreciendo detalles sobre las técnicas de violencia política empleadas en un intento de hacer que la tierra sea inviable y los minerales extraíbles.

³⁹ Entrevista 36, 17-01-2018.

⁴⁰ Esta cita está fragmentada para evitar la identificación del participante de la investigación.

6. Desarrollando el valle: relaciones públicas, desarrollo social y valle unido

La intensidad de la violencia policial fue igualada por las "campañas de información", los equipos de "relaciones comunitarias" y los programas de desarrollo de Southern según dijo una mujer, "ila Southern se ha metido en todo!"⁴¹. Catalina agrega "están metiéndose en todo, se meten en educación, en salud"⁴². Las operaciones de Southern han entrado en casi todos los aspectos de la vida del Valle de Tambo, manifestando una biopolítica extractiva, arraigada en tácticas de contrainsurgencia para asegurar el acceso a los recursos del subsuelo. Este enfoque biopolítico socialmente integrador es coherente con, y está animado por, investigaciones anteriores sobre iniciativas de contrainsurgencia y responsabilidad social corporativa (RSC) 'blandas' (Brock y Dunlap, 2018; Dunlap, 2018a, 2018b; Dunlap y Fairhead, 2014; Marijnen, 2017; Verweijen y Marijnen, 2018).

La investigación ha vinculado las intervenciones sociales de las empresas extractivas con el capítulo del "*The Insurgencies and Counterinsurgencies Field*" [Manual de campo sobre insurgencias y contrainsurgencias] (FM3-24, 2014) titulado "*Indirect Methods for Countering Insurgencies*" [Métodos indirectos para contrarrestar insurgencias], específicamente el enfoque conocido como "operaciones integradas de configuración monetaria" (Dunlap, 2018a, 2018b; Brock y Dunlap, 2018). "Las operaciones integradas de configuración monetaria son el uso coordinado de dinero, bienes o servicios para dar soporte" a los objetivos de las fuerzas de seguridad (o empresas mineras), utilizando "proyectos de asistencia para el desarrollo, infraestructura y apoyo a la gobernanza para ganar el apoyo de una población indígena y erosionar el apoyo al adversario" (FM3-24, 2014: 10-11). Existe una fuerte relación entre la contrainsurgencia peruana y estadounidense (Koven, 2016), que incluso se extiende al FM3-24 (2014: 8-1) que hace referencia explícita a Perú que emplea con éxito operaciones integradas de configuración monetaria:

Perú demuestra que las capacidades de inteligencia pueden integrarse con operaciones de información y operaciones integradas de configuración monetaria para socavar con éxito una insurgencia. El gobierno peruano finalmente logró utilizar el desarrollo económico y una campaña de información para debilitar la insurgencia de Sendero Luminoso.

El enfoque de Southern en el Valle de Tambo se parecía mucho a los principios de las operaciones integradas de configuración monetaria para "ganar" los "corazones" y "mentes" de la población y así mitigar la resistencia y obtener "licencia social" para el proyecto Tía María.

⁴¹ Entrevista 36, 17-01-2018.

⁴² Entrevista 1, 12-01-2018.

En enero de 2013, Southern Copper inició una "intervención" de amplio espectro en la vida social del Valle de Tambo. Esto primero comenzó con el "Plan Reencuentro" que invertiría 100 millones de soles (aproximadamente USD 30,6 millones) en la difusión de información de Tía María con 46 voluntarios yendo de puerta en puerta, ofreciendo pintar y dando nuevos pisos de cemento a las casas (Lapa Romero, 2017). Aranda, explica: "[Empezamos a hacer cosas, como pintar tu casa, porque después de la violencia muchas de las casas quedaron en muy mal estado con grafitis y tú sabes ese tipo de cosas"⁴³. Pintar casas, especialmente después 2015, sirvió a un doble propósito de relaciones comunitarias, pero también para pintar sobre los grafitis anti-Southern en la región. El desarrollo social, las relaciones públicas mineras y la teoría de las "ventanas rotas" —la teoría de que los símbolos visibles del desorden civil u oposición política fomentan más delincuencia (véase Williams, 2007: 211-212)— confluyen en la estrategia de contrainsurgencia.

La gente del Valle de Tambo, sin embargo, vio lo que estaba sucediendo y, en palabras de Aranda, "algunos de ellos [el personal] habían sido expulsados del Valle. Se escaparon, hubo amenazas contra sus vidas, la gente intentó quemar sus casas y [vehículos], entonces se fueron del Valle". Esto dio por terminado el "Plan Reencuentro", que luego fue revivido como "El futuro Llegó" en 2015 mientras se estaba revisando el segundo EIA. Esta iniciativa, sin embargo, terminó con la huelga indefinida y el estado de emergencia, pasando de la guerra social a la ocupación militar del Valle. Southern "sacó a todos", cuenta Aranda, "no hicimos nada en el Valle, pero lo que decidimos hacer fue una campaña informativa muy fuerte fuera de Arequipa, lo hicimos en el resto del país". Aranda hizo entrevistas con periódicos, estaciones de radio y televisión, además de comprar espacios publicitarios en el resto del país, hasta que finalmente, el actual Gobernador [regional de Arequipa] dijo: "Deberían estar haciendo esto en Arequipa". Las radios y la televisión decían: "Deberías estar haciendo esto aquí". Entonces volvimos, porque una cosa es que vuelvas sin que nadie te pregunte y otra es que alguien te pida que vuelvas"⁴⁴. La principal justificación para regresar en 2015 provino del gobernador de Arequipa y las estaciones de radio y televisión, las últimas de las cuales es sabido que son controladas por Southern. Según Lapa Romero (2017: 58), Southern conserva "el control sobre más de trece radios locales que existen en la provincia de Islay y el valle de Tambo". Según se informa, un breve caso de un periodista jefe que tenía recibos de miles de periodistas que fueron pagados por Southern por la cantidad y calidad de las críticas presentadas a los opositores a la minería (Lapa Romero, 2017: 58). Al parecer los medios de comunicación, los gobiernos nacionales y regionales eran los que estaban a favor del regreso de Southern, y no los habitantes del Valle.

⁴³ Entrevista 24, 16-01-2018.

⁴⁴ Entrevista 24, 16-01-2018.

Figura 6. Portada del libro *Construyamos confianza Proyecto Tía María de Southern Copper*.



Fuente: Valle Unido.

Después de que ingresa *Valle unido* en 2016, esta es la tercera ola de “relaciones comunitarias” de Southern (Figura 6). Valle unido constaba de 27 personas responsables de los “centros de información”, yendo de puerta en puerta con folletos informativos e implementando proyectos de desarrollo social con el objetivo, en palabras de la Gerente de Relaciones Sociales de Tía María, de tener “el proyecto de Tía María visto como una oportunidad y no como una amenaza”. Al reclutar en gran parte a personas indígenas del Valle, Valle unido desarrolló una cultura corporativa (Dugger, 1989) que permite a los miembros cocrear el nombre del grupo, hacer sesiones de tormentas de ideas para llegar mejor a la población y tener una identidad colectiva.

“Entonces les dimos información, los capacitamos”, dice Aranda, “en realidad tuvimos jornadas de capacitación para ellos donde les explicamos qué es la minería, cuál era el proyecto, cómo hacemos minería en nuestras operaciones, qué preocupaciones ambientales tenemos y qué hacer por esas preocupaciones”⁴⁵. Esto también incluye reuniones de motivación y medición del impacto de los esfuerzos de Valle unido utilizando consultores de censos, sociólogos y antropólogos. En particular, Aranda hace la distinción entre “relaciones comunitarias” y “relaciones públicas”, explicando que las relaciones públicas “son principalmente para interacciones entre nuestras autoridades su-

⁴⁵ Entrevista 24, 16-01-2018.

periores en la empresa con los alcaldes, la iglesia, asuntos sociales como festividades," mientras que las relaciones comunitarias "son mucho más en la práctica: trabajando con los agricultores, trabajando con los ganaderos y las cosas que hacemos con la población".

Las intervenciones comunitarias de Valle unido se basan en su reciente programa: *Construyamos Confianza Proyecto Tía María*, que se acercó a la comunidad en seis frentes socio-ecológicos. Primero, *Tambo Agrícola* que trabajó para mejorar la calidad del suelo, ofreciendo fertilizantes, pesticidas y semillas de "alta calidad", además de clases sobre técnicas "mejoradas" de cultivo de arroz. Además, Southern reparó canales de riego y promovió la mecanización de técnicas agrícolas. Segundo, *Tambo Ganadero* fue un programa orientado a mejorar el ganado vacuno y la ganadería en general ofreciendo talleres educativos, paja (chala o heno) gratis, dotación de personal veterinarios y ofreciendo tanques de nitrógeno que permitan las condiciones óptimas para la inseminación bovina. Según Southern, este proyecto ha "mejorado la calidad tanto de las vacas como de los cerdos" con "un incremento de 13 o un poco más en la producción de leche"⁴⁶. Tercero, *Mejora tu Vivienda*, ofreció tanques de agua Rotoplas y pisos de cemento para hogares, al mismo tiempo que se renueva la infraestructura de agua en ciudades seleccionadas. Cuarto, *Apoyo a la Educación*, proporcionó materiales escolares, computadoras, uniformes, programas extracurriculares, pintó y reparó partes de las escuelas. En quinto lugar, *Apoyo a la Salud*, invirtió en clínicas médicas, en médicos profesionales las 24 h, dentistas, clases educativas e incluso, "ha pagado o está por pagar 25 millones de soles" (aproximadamente USD 7,6 millones) por tres estudios para un hospital en la ciudad de Mollendo. Finalmente, las intervenciones comunitarias también incluyeron tres *Oficinas Informativas* en Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra (Southern, 2016, págs. 1-55), que se ubican en las calles principales y, en Cocachacra, detrás de la comisaria de la PNP. Estos centros de información eran similares a los cibercafés, excepto que tenían un personal listo para discutir los beneficios del proyecto Tía María. Era posible sentarse y ver los videos promocionales de Southern también como material promocional y carteles de Southern, el MEM, la PNP y Testigos de Jehová. Al preguntarle a una madre en Punta Bombón si alguna vez habían oído hablar de estos cibercafés, respondieron: "Sí, me enteré de este lugar, pero nunca voy, pero la gente me dijo que tienes que ir con tu DNI y firmar y luego te puedes ir"⁴⁷. Si bien esta no fue nuestra experiencia, otros relatos son similares.

Ha habido tres informes del impacto de Valle unido que, según Aranda, se puede resumir en: (1) "No les gustas;" (2) "mostramos una mejora ... [pero] Sí, no tan bien;" Y (3) "este último es un poco mejor. De hecho, estamos señalando áreas en las que tenemos que mejorar". Southern utiliza a científicos sociales, antropólogos y, con ma-

⁴⁶ Entrevista 24, 16-01-2018.

⁴⁷ Entrevista 11, 13-01-2018.

por frecuencia, sociólogos en un intento de guiar las intervenciones de desarrollo y medir su impacto para convencer a la población de que acepte el proyecto Tía María. Los estudios revelaron que el distrito Deán Valdivia era irreconciliable, estas operaciones son consistentes con los hallazgos de las investigaciones que han estudiado proyectos controvertidos de energía eólica en México (Dunlap, 2018a, 2019) y a los trabajos de antropólogos y otros científicos sociales que miden el impacto de los programas de reubicación y desarrollo en Vietnam y en otros lugares (Owens, 2015; Price, 2014). En "La ingeniería del consentimiento", Edward Bernays (1947: 118) explica que: "el ingeniero del consentimiento aprende lo que los líderes de grupo saben y no saben, hasta qué punto cooperarán con él, los medios de comunicación que llegan a ellos, las apelaciones que pueden ser válidas y los prejuicios, las leyendas o los hechos por los que viven". Esto demuestra cómo conocimientos (a menudo banales) se pueden convertir en armas y cómo los científicos sociales son fundamentales para la extracción de ingeniería social.

La guerra social es el proceso de la ingeniería social. Las operaciones de Valle unido, Asuntos Internos y su enfoque integrado de configuración monetaria se especializan en la ingeniería social de las poblaciones para convencerlas de renunciar a sus recursos naturales. En este sentido, las intervenciones en las personas se convierten en una intervención en la tierra. La ingeniería social de la extracción busca entonces romper la oposición, que incluye las conexiones de la gente con la tierra, el agua y sus medios de vida. Mientras tanto, tratan progresivamente de aislar, criminalizar y desmoralizar a los defensores de la tierra (véase Birss, 2017; Gedicks, 2015; Middeldorp et al., 2016; Rasch, 2017; Verweijen, 2017, págs. 1-17), a fin de ganar la "licencia social" a través de la aceptación popular o, más probablemente después de intervenciones policiales y militares, agotamiento y aquiescencia inducida por el miedo. El cálculo de la compañía debe recordarse, mide la aceptación en función de la intensidad de la protesta y la interrupción, o la falta de ella⁴⁸.

Una tecnología política decisiva, según Aranda, fue la creación de "comités comunitarios" que deciden qué es importante para sus comunidades y qué es necesario resolver. Aranda, resumiendo su formación de base sobre comités comunitarios, explica: "Escucha, no vengas a decirnos que necesitas un aeropuerto que está fuera de cuestión, pero si ves algo que tenga que ver con la salud, la educación, el medio ambiente, la cultura o lo que sea, tráelo aquí"⁴⁹. Los comités comunitarios permitieron a Southern ser estratégicos en la distribución de fondos y crear una cultura participativa. Lo central para controlar las comunidades locales, nos recuerdan Hochmüller y Müller

⁴⁸ Aranda ofrece este abreviado ejemplo: "Hicimos una marcha contra de ese convenio [del centro de salud] al día siguiente frente a Cocachacra [municipalidad] y solo 50 personas se presentaron en los últimos 15 minutos y nunca más, nunca más". Entrevista 24.

⁴⁹ Entrevista 24, 16-01-2018.

(2017: 175), es la "aportación de la comunidad", que puede traducirse en inteligencia civil-militar. Esta estrategia de desarrollo rural merece reconocimiento por abordar las necesidades sociales del Valle, pero desafortunadamente se emplea como un arma de persuasión al servicio de la adquisición de recursos, la "ganancia económica" y para "tener a Tía María trabajando"⁵⁰, no por el simple hecho de apoyar las aspiraciones de desarrollo de la comunidad.

Estas intervenciones sociales contra-insurreccionales que buscaban la aprobación de la población fueron inteligentes. Sin embargo, el daño estaba hecho. La respuesta local al desarrollo social fue en gran medida negativa: "es un engaño"⁵¹, "es un Chantaje"⁵², y su propósito "es que nos quieren cambiar nuestra mentalidad"⁵³. Otra mujer dice, "las "ayudas" son como pastillitas calmantes"⁵⁴. Los tanques de agua potable, pisos de cemento, fertilizantes y demás, requerían una firma que la gente estaba convencida que se estaba recolectando para mostrar al MEM como prueba de la "licencia social". Por ejemplo, una mujer sostiene que Southern tiene "la estrategia", de decir "Te voy a hacer tu piso en tu casa, pero tú me tienes que firmar este papel con tu DNI" ... Entonces no te dieron cosas porque es un regalo, no, lo hacían para recolectar firmas para según eso, llevárselos allá a Lima y presentar los papeles [para hacer creer que]que el pueblo de acá está a favor de la mina, lo cual es mentira solamente ha sido chantajes para conseguir... aprovecharse de las necesidades de la gente"⁵⁵.

Si bien un representante de campaña de Valle unido niega esto⁵⁶, las personas sintieron que Southern se estaba aprovechando de las necesidades de la gente, lo que recuerda las observaciones de Karl Polanyi ([1944] 2001: 118) sobre el "hambre", como instrumento para obligar a las personas a trabajar, o Milford Batemans (2010: 74) en su crítica de las microfinanzas como "emprendimiento impulsado por la pobreza", donde la pobreza abyecta empuja a las personas hacia esquemas de microfinanzas. Si bien organizar la privación es una técnica clásica de la conainsurgencia colonial⁵⁷, también lo es el despliegue de comodidades y regalos sociales para que la gente acepte el control político. Sin embargo, se registró ampliamente que los residentes del valle de Tambo tomaron los beneficios, pero permanecieron en total oposición a la mina.

⁵⁰ Entrevista 24, 16-01-2018.

⁵¹ Entrevista 37, 17-01-2018.

⁵² Entrevista 13, 14-01-2018.

⁵³ Entrevista 27, 16-01-2018.

⁵⁴ Entrevista 28, 16-01-2018.

⁵⁵ Entrevista 3, 12-01-2018.

⁵⁶ Entrevista 21, 15-01-2018.

⁵⁷ Sitzkrieg da otra exploración de la construcción de la privación ambiental (*sitting war* "guerra sentada o de broma" o *slow war of attrition* "guerra lenta de desgaste") (Huff, 2017: 157, 167).

Los estudios del terreno humano, las relaciones públicas y la práctica del desarrollo social, en combinación con la represión estatal, también explotan los prejuicios locales. El primero fue el racismo concebido popularmente, que dividía a los agricultores propietarios de los jornaleros. El discurso racista fue especialmente relevante en La Punta, entre los administradores municipales y criollos mayores. Un agente municipal declara:

Los agricultores, los agricultores nativos reales, no son las personas que hicieron las huelgas. Las personas que hicieron las huelgas son los trabajadores de los agricultores. Que son las personas que trabajan todos los días en el campo: las personas que se llenan los bolsillos de dinero agrícola (Entrevista 15, 14-01-2018).

Los jornaleros son típicamente migrantes de Cusco, Puno y otras partes de la sierra (Lapa Romero, 2017), que albergan grandes poblaciones indígenas. Este punto de vista estaba ligado a una narrativa de bienestar conservadora que menospreciaba el sistema de recolección y alimentación comunal del "Payapado"⁵⁸ y afirmaba que los jornaleros reciben asistencia social y no soportan los gastos generales agrícolas de tractores, fertilizantes y pesticidas. Esta narrativa crea una división entre jornaleros migrantes y jornaleros propietarios, y, adicionalmente, se combina con las afirmaciones de que los *Espartambos* son agentes provocadores ajenos del Valle. Esta narrativa de provocador externo, es una táctica de desinformación común en todo el mundo (Gelderloos, 2013), que según muchos es completamente falso ya que "los *Espartambos* son de aquí, son hijos de *Tambeños*"⁵⁹. Los participantes de la investigación repetidamente afirmaron que "todos estaban unidos"⁶⁷ y "todos los de aquí fueron a la protesta, era toda la gente que trabajaba en la agricultura".⁶⁸ Una maestra explicó que "hay mucha gente racista", mientras que otra mujer argumentó que Southern "se aprovecha de esto... manejan todo esto",⁶⁹ sugiriendo que están explotando un discurso que culpa a la oposición y / o autodefensa combativa a jornaleros de piel más oscura y no a los llamados "verdaderos campesinos nativos".

⁵⁸ Payapado de payapar o pallapar: (del quechua *pallani*, coger). *Perú (Arequipa)*. 1. Espigar, rastrear. //2. *Perú (Arequipa)*. Buscar frutos después de la cosecha. // 3. *Perú*. Robar. Pallapar. (2009). En el Diccionario de Peruanismos (2ª ed.). Lima, Perú. / En el valle de tambo se continúa payapando, después de cada cosecha la gente puede ir a recoger libremente lo que queda en las chacras, de esta manera mucha gente continúa alimentándose payando frutos, verduras legumbres, etc.

⁵⁹ Entrevista 12, 14-01-2018.

7. Conclusión: el negocio es la guerra por otros medios

A través de la explicación cronológica del conflicto y los eventos clave, este artículo ha mostrado las reacciones políticas "desde arriba" tanto del estado peruano como de Southern Copper. Dicha reacción, se enmarca en un enfoque de contrainsurgencia concebido para implementar socialmente un camino para la extracción de los recursos naturales. No es de extrañar que la propia empresa lo niegue. "Seamos honestos aquí", le dije al jefe de Relaciones Comunitarias de Tía María, "¿el trabajo de Valle unido no es similar a ejercer la contrainsurgencia para esencialmente pacificar a la gente que están en contra de la mina, para comprar sus corazones y mentes?" El contestó: "Acá no ha habido insurgencia...", acá ha habido "simple violencia común y corriente", luego él continuó: "Nosotros no somos pacificadores; nuestro "saber hacer" es ser desarrollistas"⁶⁰. Aparte de los repetidos intentos de Southern de llamar a sus opositores "terroristas" o "terroristas anti mineros", envueltos en "terrorismo blanco"⁶¹, que incluso se extiende a Carlos Aranda en un evento público, llamado "Jueves Minero", recordando a la gente que el lugar de nacimiento de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, es Deán Valdivia, evocando el estigma del *terruco* para dar a entender que "los pobladores del Valle del Tambo tienen genes terroristas" (La República, 2018). Una declaración que luego se retractó. El Valle de Tambo no solo ha experimentado esfuerzos sostenidos de guerra social, o lo que la empresa llama "desarrollismo", sino que la Policía Nacional del Perú (PNP) y DINOES invadieron repetidamente la región, lo que incluye una ocupación militar de sesenta días bajo el estado de emergencia. Si bien los manifestantes se involucraron en la "violencia corriente", esto fue provocado por una intervención extractiva y se encontró con un enfoque de contrainsurgencia de todo el gobierno orquestado a través de acuerdos público-privados formales e informales.

La línea que se formuló entre la violencia "excesiva" administrada por la PNP y los esfuerzos de Southern para "ayudar" a superar sus problemas ambientales y de desarrollo es más delgada de lo que sugeriría la versión pública oficial del sector privado. La línea se desdibuja formalmente con las asociaciones de seguridad pública-privada, pero informalmente con las "relaciones públicas" de Southern con "alcaldes, la iglesia, [y] cosas sociales" que, muchos especulan, implican pagar a los líderes políticos nacionales. Esta división entre el sector público y privado, bajo el neoliberalismo, comienza a disolverse cuando las empresas transnacionales negocian contratos con el gobierno, militares y policías para ejercer la represión contra los deseos populares del Valle. Los intereses ilegales creados en el pasado se están convirtiendo en normas políticas de hoy bajo la economía política neoliberal, cimentando un ciclo de auto-refuer-

⁶⁰ Entrevista 43, 18-01-2018.

⁶¹ Entrevista (Huff, 2017) "Terrorismo blanco", según el juez peruano Duberlí Rodríguez, significa "generar ansiedad y alarma en la población a través de los medios y las redes sociales".

zo de extracción de recursos naturales y militarización. La raíz de este conflicto minero se encuentra en un gobierno nacional, regional y, en ocasiones, local que, por razones de crecimiento económico, desarrollo social y, probablemente, interés propio, quiere la mina y hace caso omiso de las preocupaciones agrícolas y ambientales populares. El discurso de la guerra social resuena cuando el sistema político peruano sirve como "instrumento [de] nuestros enemigos", específicamente políticos y empresas mineras, quienes están utilizando este sistema "para perseguir y subyugar" el Valle del Tambo a los imperativos del desarrollo industrial y de crecimiento económico.

Esto no quiere decir que no existan problemas en el Valle de Tambo. La contrainsurgencia "blanda" subsiste en cuestiones sociales y de vulnerabilidad, a menudo utilizando sociólogos, antropólogos y equipos de censos, como parte integral de las operaciones integradas de configuración monetaria, no solo para mapear el terreno humano, sino para encontrar las grietas, fisuras o conflictos comunales existentes para dividir y conquistar poblaciones. En Perú, es común colocar a las poblaciones urbanas contra las rurales (Andreucci y Kallis, 2017), o los propietarios de chacras contra los jornaleros. Otra estrategia de gobernabilidad divisiva es aprovechar los fracasos de la agricultura industrial (marginación de la agricultura a pequeña escala) para posicionar la minería como una solución. La información y las operaciones civiles o el desarrollo comunitario se emplean para construir lentamente una armadura social para desviar el ataque del oponente. Las quejas, la necesidad, el deseo o las ambiciones sirven como puntos de intervención para comenzar un proceso de ingeniería social o para ganar "corazones" y "mentes". Esta "necesidad" por parte de la gente, la supresión de prácticas sostenibles y la capacidad de los gobiernos y las empresas para intervenir con dinero están produciendo espacios (de baja intensidad) de "militarización por consumo" (Marijnen y Verweijen, 2016: 276)⁶². Esta militarización, sin embargo, es la militarización de la vida cotidiana, descrita por Foucault y destacada por el discurso de la guerra social, que impulsa el progreso tecno-industrial. En este caso, se manifiesta en la construcción de recintos, la contratación de personal de seguridad de la mina, la realización de pruebas de perforación y el intento de apropiarse legalmente de los recursos hídricos para comenzar la explotación mineral. El resultado es un espacio de conflicto social y maniobras sociopolíticas para la lenta y continua ingeniería social y así la aceptación política de la mina Tía María.

La ecología política de la contrainsurgencia disecciona la militarización y la mercantilización de la naturaleza. Este campo de estudio está éticamente posicionado para hacer legibles las reacciones políticas de los actores estatales, corporativos y de élite al

⁶² Marijnen y Verweijen explican cómo la conservación neoliberal ha intensificado la espectacularización de la conservación militarizada, por ejemplo, a través de la intrusiva difusión multimedia de imágenes de guardaparques fuertemente armados como "verdaderos héroes". Además, ha fomentado la mercantilización de la militarización al invitar activamente a partidarios individuales a financiar directamente prácticas de conservación militarizadas, o lo que las autoras llaman «militarización por consumo» (Marijnen y Verweijen, 2016: 276).

revelar tanto las técnicas coercitivas "duras" y las tecnologías sociales "blandas" de control político. La contrainsurgencia históricamente ha intervenido en las "naturalezas" para privar a las personas de sus tierras y territorios ilegibles como un medio para desarrollar los recursos humanos y naturales en el proyecto colonial y, más tarde, estatal (Dunlap y Fairhead, 2014; Peluso y Vandergeest, 2011) Ahora, más que nunca, las personas son el objetivo de la pacificación para persuadirlas, con "las lentejas", el "palo", o la depravación, de que renuncien a sus tierras y recursos naturales. Los pueblos indígenas, los defensores de la tierra y las personas con vínculos a la tierra, cada vez más equiparados con los insurgentes comunistas del pasado, constituyen el terreno político que se debe gestionar y configurar para acceder a la tierra y los recursos del subsuelo. Southern persiste en orquestar su guerra social de desgaste para iniciar operaciones. Mientras tanto, los agricultores continúan protestando, ganándose condenas de prisión y las cicatrices físicas y mentales de las palizas y asesinatos de amigos, seres queridos o conocidos. Se está produciendo un espacio psico geográfico, no solo a través de la coacción y represión, sino también a través de inversiones biopolíticas en el Valle del Tambo en el que se utilizan amenidades, regalos y tecnologías como método para aprobar la extracción. Los bosques fueron destruidos una vez para controlar a la gente y ahora la gente debe ser controlada para adquirir los recursos del subsuelo. El estado es el marco y la estructura que facilita la conquista sistemática en curso de los recursos naturales, y mientras que "la política es la continuación de la guerra por otros medios", podemos decir que los negocios son un tipo de guerra por todos los medios para cautivar cuerpos dóciles y capturar fértiles tierras para maximizar el valor para los accionistas, mantener la legitimidad y, en consecuencia, afirmar el camino de la rápida pérdida de biodiversidad, las crisis ecológicas y climáticas.

8. Referencias bibliográficas

Aguilar-Støen, Mariel (2016). Beyond transnational corporations, food and biofuels: the role of ex-tractivism and agribusiness in land grabbing in Central America. *Forum for Development Studies*, 43(1), 155-175.

<https://doi.org/10.1080/08039410.2015.1134641>

Aguirre, Carlos (2011). Terruco de m... Insulto y estigma en la guerra sucia peruana. *Histórica*, 35(1), 103-139.

Álvarez, Yolanda (2016). La Batalla del Cobre [Reportaje documental], *En Portada*, rtve.es, 25 de agosto, ([enlace](#)).

Andreucci, Diego y Giorgos Kallis (2017). Governmentality, development and the violence of natural resource extraction in Peru. *Ecological Economics*, 134(C): 95-103. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.01.003>

Anonymous. (2012) *Guerra Social: Tension Antisocial*. Distri Josep Gardenyes.

- Arce, Moisés (2014). *Resource extraction and protest in Peru*. University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qh8z9>
- Arendt, Hannah [1951] (1962). *The origins of totalitarianism*. The World Publishing Company.
- Bateman, Milford (2010). *Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism*. Zed Books. <https://doi.org/10.5040/9781350223974>
- BBC (2019). Odebrecht case: Politicians worldwide suspected in bribery scandal. *BBC.com*, 17 de abril, ([enlace](#)).
- Bebbington, Anthony. (2012) *Social conflict, economic development and the extractive industry: evidence from South America*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203639030>
- Bebbington, Anthony; Denise Humphreys Bebbington; Jeffrey Bury; Jeannet Ligan; Juan Pablo Muñoz y Martin Scurrah (2008). Mining and Social Movements: Struggles Over Livelihood and Rural Territorial Development in the Andes. *World Development*, 36(12), 2888-2905. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.11.016>
- Benjaminsena, Tor A.; Halvard Buhaug; Fiona McConnell; Joanne Sharpd y Philip E. Steinberge (2017). Political geography and the environment. *Political Geography*, 56, A1-A2. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.11.008>
- Bigger, Patrick y Benjamin D. Neimark (2017). Weaponizing nature: The geopolitical ecology of the US Navy's biofuel program. *Political Geography*, 60, 13-22. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.03.007>
- Blakeley, Ruth. (2009) *State terrorism and neoliberalism: The north in the south*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203876510>
- Borras SaturninoM.; Cristóbal Kay; Sergio Gómez y John Wilkinson (2012). Land grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America. *Canadian Journal of Development Studies /Revue canadienne d'études du développement*, 33(4), 402-416. <https://doi.org/10.1080/02255189.2012.745394>
- Bravo, R.R. (2015) Militarization and Environmental Struggles in Peru. SOA Watch. soaw.org, febrero, ([enlace](#)).
- Brigham, Erwin R. (1968) Pacification Measurement in Vietnam: The Hamlet Evaluation System. Civil Operations for Revolutionary Development Support: SEATO International Security Seminar, Manila, June 3-10, 1-27.
- Brockm Andrea y Alexander Dunlap (2018). Normalising Corporate Counterinsurgency: engineering consent, managing resistance and greening destruction around the Hambach coal mine and beyond. *Political Geography*, 62(1), 33-47. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.09.018>
- Büscher, Bram y Maano Ramutsindela (2017). Green Violence: Rhino Poaching and the War to Save Southern Africa's Peace Parks. *African Affairs*, 115(458), 1-22.

- Cavanagh, Connor J. y Tor A. Benjaminsen (2017). Political ecology, variegated green economies, and the foreclosure of alternative sustainabilities. *Journal of Political Ecology*, 24, 200-341. <https://doi.org/10.2458/v24i1.20800>
- Churchill, Ward y Jim Vander Wall (2002). *Agents of repression: The FBI's secret wars against the Black Panther Party and the American Indian Movement* (Vol. 7). South End Press.
- Clausewitz, Carl von. [1832] (2007). *On War*. Oxford University Press.
- Copeland, Nicholas (2012). Greening the Counterinsurgency: The Deceptive Effects of Guatemala's Rural Development Plan of 1970. *Development and Change*, 43(4), 975-998. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2012.01783.x>
- Daly, Gabriel (2015). Tía María: los factores detrás del conflicto (INFORME). ElComercio.pe, 12 de abril, ([enlace](#)).
- Devine, Jennifer (2014). Counterinsurgency ecotourism in Guatemala's Maya Biosphere Reserve. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32, 984-1001. <https://doi.org/10.1068/d13043p>
- Downey, Liam; Eric Bonds y Katherine Clark (2010). Natural Resource Extraction, Armed Violence, and Environmental Degradation. *Organization Environment*, 23(4): 453-474. <https://doi.org/10.1177/1086026610385903>
- Dugger, William M. (1989). *Corporate Hegemony*. Greenwood Press.
- Dunlap, Alexander (2014a). Power: Foucault, Dugger and Social Warfare. En VVAA *The BASTARD Chronicles: Social War* (pp. 55-106). Ardent Press.
- Dunlap, Alexander (2014b). Permanent War: Grids, Boomerangs, and Counterinsurgency. *Anarchist Studies*, 22(2), 55-79.
- Dunlap, Alexander (2016). Counter-insurgency: let's remember where prevention comes from and its implications. *Critical Studies on Terrorism*, 9(2), 380-384. <https://doi.org/10.1080/17539153.2016.1178487>
- Dunlap, Alexander (2017). Wind Energy: Toward a "Sustainable Violence" in Oaxaca, Mexico. *NACLA*, 49(4), 483-488. <https://doi.org/10.1080/10714839.2017.1409378>
- Dunlap, Alexander (2018a). The 'Solution' is now the 'Problem:' Wind Energy, Colonization and the 'Genocide-Ecocide Nexus' in the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca. *The International Journal of Human Rights*, 42(4), 550-573. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1397633>
- Dunlap, Alexander (2018b). Counterinsurgency for wind energy: The bii hioxo wind park in juchitán, Mexico. *The Journal of Peasant Studies*, 45, 630-652. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1259221>
- Dunlap, Alexander (2018c). Insurrection for land, sea and dignity: Resistance and autonomy against wind energy in Álvaro Obregón, Mexico. *Journal of Political Ecology*, 25, 120-143. <https://doi.org/10.2458/v25i1.22863>

- Dunlap, Alexander (2019). 'Agro sí, mina NO!' the Tía Maria copper mine, state terrorism and social war by every means in the Tambo Valley, Peru. *Political Geography*, 71, 10-25. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.02.001>
- Esparza, Marcia; Henry R. Huttenbach y Daniel Feierstein (2009). *State violence and genocide in Latin America: The cold war years*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203867907>
- Fairhead, James; Melissa Leach y Ian Scoones (2012). Green Grabbing: a new appropriation of Nature? *Journal of Peasant Studies*, 39(2), 237-261. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>
- Castillo Fernández, Marlene; Mary Chávez Quijada; Mirella Gallardo Marticorena; David del Carpio Lazo y Jesús Gómez Urquizo (2011). Valle de Tambo-Islay. Territorio, Agua y Derechos Locales en riesgo con la minería a tajo abierto. CopperAccion. (Disponible en: [enlace](#)).
- FLD (2017). UPR Submission - Peru 2017. *Frontline Defenders*, 10 de mayo, ([enlace](#)).
- Flemmer, Riccarda y Almut Schilling-Vacaflor (2016). Unfulfilled promises of the consultation approach: the limits to effective indigenous participation in Bolivia's and Peru's extractive industries. *Third World Quarterly*, 37(1), 172-188. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1092867>
- FM3-24 (2014). *Insurgencies and Countering Insurgencies*. Department of the Army Headquarters. (Disponible en: [enlace](#)).
- Foucault, Michel [1977] (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Random House.
- Foucault Michel [1976] (2003). *"Society Must Be Defended" Lectures at the College De France 1975-1976*. Picador. Foucault, Michel [1979] (2008) *The Birth of Biopolitics: Lectures at the College De France 1978-1979*. Picador.
- Franks, Daniel M.; Rachel Davis; Anthony J. Bebbington; Saleem H. Ali; Deanna Kemp y Martin Scurrah (2014). Conflict translates environmental and social risk into business costs. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111(21), 7576-7581. <https://doi.org/10.1073/pnas.1405135111>
- Galeano, Eduardo [1973] (1997). *Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a Continent*. Monthly Review Press.
- Gedicks, Al (1994). *The new resource wars: Native and environmental struggles against multinational corporations*. Black Rose Books Ltd.
- Gedicks, Al (2015). Transnational mining corporations, the environment, and indigenous communities. *The Brown Journal of World Affairs*, 22(1), 129-152.
- Grajales, Jacobo (2013). State Involvement, Land Grabbing and Counter-Insurgency. *Development and Change*, 44(2), 211-232. <https://doi.org/10.1111/dech.12019>
- Grufides. (2013) Police in the Pay of Mining Companies: The responsibility of Switzerland and Peru for human rights violations in mining disputes. *Grufides.org*, ([enlace](#)).

Gustafson, Bret y Natalia Guzmán Solano (2016). Mining movements and political horizons in the Andes: Articulation, democratisation, and worlds otherwise. En K. Deonandan y M. L. Dougherty (eds.), *Mining in Latin America: critical approaches to the new extraction* (pp. 141-159). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315686226-8>

Hildyard, Nicholas (2016). *Licensed larceny: Infrastructure, financial extraction and the Global South*. Manchester University Press.
<https://doi.org/10.7228/manchester/9781784994266.001.0001>

Holmes, George (2007). Protection, politics and protest: understanding resistance to conservation. *Conservation and Society*, 5(2): 184-201.

Jaskoski Maia (2013). *Military politics and democracy in the Andes*. Johns Hopkins University Press.

Jaskoski, Maia (2014). Environmental licensing and conflict in Peru's mining sector: a path-dependent analysis. *World Development*, 64, 873-883.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.010>

Kilcullen, David (2006). Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency. *IO Sphere*, 2(2), 29-35.

Koven, Barnett S. (2016) Emulating US Counterinsurgency Doctrine: Barriers for Developing Country Forces, Evidence from Peru. *Journal of Strategic Studies*, 39(5-6), 878-898. <https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1154462>

La República (2013). Perú: Fiscalía investiga a Southern por presunta contaminación. *LaRepública.pe*, 16 de abril, ([enlace](#)).

La República (2015) Video muestra que policía "sembró" arma a manifestante contra Tía María. *LaRepública.pe*, 24 de abril, ([enlace](#)).

La República (2017). Gobierno Regional de Arequipa recibirá donación de S/770 mil de Southern. *LaRepública.pe*, 5 de diciembre, ([enlace](#)).

La República (2018). Tía María: Piden 30 años de prisión para Pepe Julio Gutiérrez. *LaRepública.pe*, 17 de enero, ([enlace](#)).

Le Billon, Philippe (2001). The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. *Political Geography*, 20(5), 561-584. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(01\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4)

Le Billon, Philippe (2012). *Wars of plunder*. Columbia University Press.

Le Billon, Philippe y Melanie Sommerville (2017). Landing capital and assembling 'investable land' in the extractive and agricultural sectors. *Geoforum*, 82, 212-224.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.08.011>

Murray Li, Tania (2014) What is land? Assembling a resource for global investment. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 39(4): 589-602.
<https://doi.org/10.1111/tran.12065>

- Lust J. (2014). Peru: Mining Captial and Social Resistance. En H. Veltmeyer y J.F. Petras (eds.), *The new extractivism: a post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first cen-tury?* (pp.192-221). Zed Books.
- Marijnen, Esther y Judith Verweijen (2016). Selling green militarization: The discursive (re) pro-duction of militarized conservation in the Virunga National Park, Democratic Republic of the Congo. *Geoforum*, 75, 274-285. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.08.003>
- Marijnen, Esther. (2017) The 'green militarisation'of development aid: the European Commission and the Virunga National Park, DR Congo. *Third World Quarterly*, 38(7), 1566-1582. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1282815>
- Martínez-Alier, Joan. (2002) *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Edward Elgar.
- Massé, Francis y Esther Lunstrum (2016). Accumulation by securitization: Commercial poaching, neoliberal conservation, and the creation of new wildlife frontiers. *Geoforum*, 69, 227-237. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.03.005>
- McClintock C. (2005) The Evolution of Internal War in Peru: The Conjunction of Need, Creed, and Organizational Finance. En C.J. Arnsion y I.W. Zartman (eds.), *Rethinking the Economics of War: The Intersection of Need, Creed, and Greed* (pp.52-83). Johns Hopkins University Press.
- MEM. (2018) Inversión minera se acelera y crece en 54.8% en noviembre. Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Perú, 4 de enero, ([enlace](#)).
- Middeldorp, Nick y Philippe Le Billon (2019). Deadly environmental governance: Authoritarianism, eco-populism and the repression of environmental and land defenders. *Annals of the Association of American Geographers*, 109(2), 324-337. <https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1530586>
- Mollendinos TV (2015). Paro en Islay. Ollanta Humala ¿traiciono a su palabra? su discurso en el año 2010 en Cocachacra. *Mollendinos TV* vía youtube.com, 12 de mayo, ([enlace](#)).
- Nixon, Rob (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061194>
- Owens, Patricia (2015). *Economy of Force: Counterinsurgency and the Historical Rise of the Social*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO-9781316387771>
- Owens, Patricia. (2017) Decolonizing civil war. *Critical Analysis of Law*, 4(2), 160-169.
- Paley, Dawn (2014). *Drug War Capitalism*. AK Press.
- Palomino, Roy (2015). [Perú] Estas Son Las Mineras Quele Pagan a Policía Para Que Repriman las Protestas Contra Ellas. Mi Mina Corrupta [blog], 1 de mayo, ([enlace](#)).
- Peluso, Nancy Lee y Peter Vandergeest (2011). Political Ecologies of War and Forests: Counterinsurgencies and the Making of National Natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), 587-608. <https://doi.org/10.1080/00045608.2011.560064>

Peluso, Nancy Lee y Michael Watts (2001). *Violent environments*. Cornell University Press.

Polanyi, Karl [1944] (2001). *The great transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.

Price, David H. (2014). Counterinsurgency by Other Names: Complicating Humanitarian Applied Anthro-pology in Current, Former, and Future War Zones. *Human Organization*, 73(2), 95-105. <https://doi.org/10.17730/humo.73.2.4n50n51170hg3740>

Quintanilla Pablo y Rogelio Scott (2013). Teorizando la acción colectiva en los conflictos socioambientales del Perú actual: el caso del conflicto de "Tía María"(2009-2011). *Revista Andina de Estudios Políticos*, 3(1), 53-69. <https://doi.org/10.35004/raep.v3i1.53>

Radio Uno (2011). Viceministros se negaron a ingresar a embalse de relaves de Quebrada Honda. *Radiouno.pe*, 11 de octubre, ([enlace](#)).

Rasch, Elisabet Dueholm (2017). Citizens, criminalization and violence in natural resource conflicts in Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 103, 131-142. <https://doi.org/10.18352/erlacs.10193>

Redacción RPP (2017). Absuelven a agricultor a quien "sembraron" arma durante protestas contra Tía María. *rpp.pe*, 18 de agosto, ([enlace](#)).

Reuters (2018). At least two killed in protests by potato farmers in Peru -police. *reuters.com*, 1 de febrero, ([enlace](#)).

Rodney, Walter [1972] (2009). *How Europe Underdeveloped Africa*. Howard University Press.

Lapa Romero, José Antonio (2017). *Lo que los ojos no ven: Capital minero, hegemonía, represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: el caso del conflicto Tía María en la región Arequipa*. Grupo Editorial Arteidea.

Rosado, Federico (2019). ¿Quién mató a Carlos Guillén? *LaRepública.pe*, 26 de mayo, ([enlace](#)).

Shahin (2016). *Nietzsche and Anarchy*. Elephant Editions.

Southern (2016). *Construyamos Confianza: Proyecto Tía María Peru*. Southern Copper Peru.

Springer, Simon (2016). *The discourse of neoliberalism: An anatomy of a powerful idea*. Rowman & Littlefield.

Springer, Simon y Philippe Le Billon (2016). Violence and space : An introduction to the geographies of violence. *Political geography*, 52, 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.03.003>

Springer, Simon; Jennifer Mateer; Martin Locret-Collet y Maleea Acker (eds.) (2019). *Undoing Human Supremacy: Anarchist Political Ecology in the Face of Anthroparchy*. Vol. 1-4. PM Press.

Sullivan, Lynda (2015). Peru's Tia Maria Mining Conflict: Another Mega Imposition. *Upside Down World, Upside Down World*, 11 de junio, ([enlace](#)).

Sullivan, Sian (2013). After the Green Rush? Biodiversity Offsets, Uranium Power and The 'Cal-culus of Casualties' in Greening Growth. *Human Geography*, 6(1): 80-101. <https://doi.org/10.1177/194277861300600106>

Trelles, Nelly. (2018) Terruquear, terruqueo, terruqueadores. *Castellano Actual*, Universidad de Piura, 19 de febrero, ([enlace](#)).

Ugarte-Cornejo, Manuel Alejandro (2020). Gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Perú. *Análisis Político*, 33(99), 24-40. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90935>

Ulloa, Astrid [2005] (2013). *The Ecological Native: Indigenous Peoples' Movements and Eco-Governmentality in Columbia*. Routledge.

Ulloa, Astrid (2017). Dinámicas ambientales y extractivas en el siglo XXI: ¿es la época del Antropoceno o del Capitaloceno en Latinoamérica? *Desacatos*, 54: 58-73. <https://doi.org/10.29340/54.1740>

Veltmeyer, Henry y James F. Petras (2014). *The new extractivism: a post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first century?* Zed Books.

Verweijen, Judith y Alexander Dunlap (2021). The evolving techniques of the social engineering of extraction: Introducing political (re)actions 'from above' in large-scale mining and energy projects. *Political Geography*, 88, 102342. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102342>

Verweijen, Judith y Esther Marijnen (2018). The counterinsurgency/conservation nexus: guerrilla livelihoods and the dynamics of conflict and violence in the Virunga National Park, Democratic Republic of the Congo. *The Journal of Peasant Studies*, 45(2): 300-320. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1203307>

Wagner, Courtney Hammond; Michael Cox y José Luis Bazo Robles (2016) Pesticide lock-in in small scale Peruvian agriculture. *Ecological Economics*, 129, 72-81. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.05.013>

Wiener, Gabriela (2018). Apología de la imbecilidad. *LaRepública.pe*, 25 de enero, ([enlace](#)).

Williams Kristian, Lara Messersmith-Glavin y William Munger (eds.) (2013). *Life During Wartime: Resisting Counter-insurgency*. AK Press.

Williams, Kristian (2007). *Our Enemies in Blue: Police and Power in America*. South End Press.

Wolfe, Patrick (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. *Journal of Genocide Research*, 8(4), 387-409. <https://doi.org/10.1080/14623520601056240>

Ybarra, Megan (2012). Taming the Jungle, Saving the Maya Forest: Sedimented Counterinsurgency Practices in Contemporary Guatemalan Conservation. *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), 479-502. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.6669>